El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

Radicación No.: 66170-31-05-001-2017-00293-01

Proceso: Ordinario laboral

Demandantes: Julio Arley Sierra

Demandado: Sociedad Gaseosas Posada Tobón S.A. -Postobón S.A.-

Juzgado de origen: Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas

Magistrada: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón

**TEMAS: CONTRATO DE TRABAJO / ELEMENTOS / DIFERENCIAS CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / LA SUBORDINACIÓN COMO PRESUPUESTO DETERMINANTE / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL.**

Como se ha manifestado en innumerables pronunciamientos de esta colegiatura, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una presunción de subordinación que se activa tan pronto la parte actora prueba que prestó sus servicios personalmente a la parte demandada. Con arreglo a tal presunción, el pretensor se ve relevado de la carga de probar la subordinación, pues de inmediato se produce un traslado de la carga de la prueba a la parte demandada, quien debe demostrar que la relación no era laboral, sino de otra índole.

Como premisa fundamental, es necesario precisar que, contrario a los contratos de trabajo, en los contratos de prestación de servicios no hay subordinación, lo que significa que el prestador del servicio únicamente está obligado a cumplir con el objetivo para el que ha sido contratado, en el plazo acordado y bajo los términos acordados. (…)

Ahora, es claro que si el contrato a realizar cumple con los requisitos para que se genere una relación de tipo laboral, con los elementos contemplados por el artículo 23 del C.S.T, subrogado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990, esto es, i) actividad personal del trabajador, ii) continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, y iii) salario como retribución del servicio, nace entre las partes un vínculo laboral con las respectivas obligaciones que se derivan de todo contrato de trabajo…

En cuanto al segundo de los señalados elementos, el máximo Tribunal de la Justicia Laboral ha precisado que para establecer si hubo o no subordinación en desarrollo de la prestación de un determinado servicio, se debe verificar, entre otros criterios, por ejemplo: si el prestador de servicios tenía el deber de asistir a reuniones programadas por la empresa; si contaba con disposición de cumplir órdenes cuando se le impartieran; si sus funciones eran similares a las del personal de planta; si la asignación de turnos al prestador de servicios y al personal de planta no se diferenciaba de manera relevante; si el prestador de servicios estaba sujeto al poder disciplinario del favorecido por sus servicios.

#### **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA**

#### **SALA DE DECISIÓN LABORAL No. 1**

Magistrada ponente: **Ana Lucía Caicedo Calderón**

Pereira, catorce (14) de mayo dos mil veintiuno (2021)

 Acta No. 72 A del 29 de abril de 2021

Teniendo en cuenta que el artículo 15 del Decreto No. 806 del 4 de junio de 2020, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, estableció que en la especialidad laboral se proferirán por escrito las providencias de segunda instancia en las que se surta el grado jurisdiccional de consulta o se resuelva el recurso de apelación de autos o sentencias, la antigua Sala de Decisión Laboral No. 1[[1]](#footnote-1) del Tribunal Superior de Pereira, integrada por las Magistradas **ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN** como Ponente y **OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA** y por el Magistrado **JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ**, procede a proferir la siguiente sentencia escrita dentro del proceso ordinario laboral instaurado por **JULIO ARLEY SIERRA** en contra de la **SOCIEDAD GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. – POSTOBÓN S.A.**

**PUNTO A TRATAR**

Por medio de esta providencia procede la Sala a resolver las apelaciones del demandante y la sociedad demandada en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas el pasado 18 de junio de 2019. Para ello se tiene en cuenta lo siguiente:

1. **LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN**

**JULIO ARLEY SIERRA** asegura que laboró para la sociedad **POSTOBON S.A.** del 15 de marzo de 1993 al 22 de diciembre de 2016, mediante contrato de trabajo a término indefinido, tiempo durante el cual ocupó los cargos de “lubricador de vehículos” y “mecánico automotriz”, lubricador hasta el 31 de diciembre de 1996 y de ahí en adelante mecánico hasta la finalización del vínculo laboral.

Asegura igualmente que las labores del cargo las prestó de manera personal y en forma directa en las instalaciones de la empresa en el municipio de Dosquebradas y que las tareas le eran asignadas en forma verbal o escrita por sus jefes inmediatos, tales como el Gerente, el Jefe de Transportes, el Jefe de Vehículos, el Jefe de Almacén y el Jefe Taller.

Seguidamente enumera 15 funciones del cargo, relacionadas con el mantenimiento mecánico, reparación y sincronización del parque automotor de la empresa, lo que incluía el desplazamiento hasta los sitios donde quedaban varados los vehículos para repararlos, evaluación técnica y de aptitud de los conductores contratados por la empresa, traslado de los vehículos que por orden del gerente debían ser enviados a Bogotá para chatarrización, traslado de los vehículos para su revisión tecno-mecánica en la empresa CARDISSEL de Dosquebradas, compra de repuestos y accesorios para la reparación de los vehículos y seguimiento a las garantías de los vehículos nuevos, etc.

Agrega que durante todo el tiempo que prestó sus servicios, la sociedad demandada le hacía suscribir unos contratos que denominó *“contratos de prestación de servicios”*, cada dos, tres o cuatro meses, a criterio del Gerente o su representante legal, y a veces en cada pago quincenal; que durante todo el tiempo laborado desarrolló sus labores cumpliendo horario de trabajo de 06:00 a.m. a 12:00m y de 01:00 pm hasta las 07:00 pm, pero frecuentemente se quedaba laborando hasta altas horas de la noche, laborando de lunes a domingo y con disponibilidad permanente para acudir, a cualquier hora del día y de la noche y en cualquier lugar del eje cafetero, Norte del Valle y Chocó, a desvarar vehículos de la empresa, conforme a las órdenes puntuales de sus jefes.

Señala que, a partir del mes de julio de 2004, la sociedad contratante obligó al señor Sierra y a los demás trabajadores de talleres a suscribir un contrato denominado “comodato precario de inmueble” por el presunto préstamo o arrendamiento de la franja de las instalaciones donde laboraba en el taller de mecánica dentro de la sede de la empresa en Dosquebradas, cobrándole una suma de dinero por el uso de esas instalaciones y que por tal concepto empezó pagando $20.000 pesos mensuales en 2004 y terminó pagando $40.000 pesos.

Seguidamente informa que en el año 1993 empezó devengando la suma mensual de $480.000 y que dicha suma se fue incrementando año a año, conforme se enumera en el hecho décimo quinto de la demanda, hasta llegar a ganar $3.500.000 en 2016; que el salario se lo pagaban por quincenas vencidas, mediante consignaciones en sus cuentas de ahorros en Banco Caja Social y Banco Agrario de Colombia, que sus labores de mecánico las realizó utilizando vehículos, herramientas, materiales e insumos suministrados por POSTOBON S.A., tales como prensas de taladros de árbol, banco, compresores, pulidoras, gatos hidráulicos, lavadoras, hidráulicas, esmeriles, máquina engrasadora, máquina de aceite, llaves de pernos, palancas de fuerza y todo tipo de herramientas manuales.

Indica que siempre debía usar, dentro y fuera del lugar de trabajo, los uniformes de dotación que le eran vendidos por la empresa y que esta le exigió la afiliación y pago de la seguridad social como independiente. Señala igualmente que durante todo el tiempo que laboró, la empresa no le pagó las prestaciones sociales inherentes al contrato de trabajo y que a finales del año 2013, por orden del señor GUSTAVO RESTREPO CARVAJAL, gerente de la sucursal, y el señor ROBERT ANDRÉS SARMIENTO OCAMPO, transmitió a los trabajadores contratistas del taller que debían asociarse con el mecánico de monta carga, WILSON ALMEIRO TAPIAS INFANTE para conformar una empresa, porque en adelante la empresa no contrataría más servicios con particulares, y que quien no aceptara estas nuevas condiciones, no tendría más trabajo. Además, les presentaron a la señora contadora, SANDRA MARITZA CARDONA, quien sería la persona que los asesoraría para dicho trámite y se encargaría de elaborar todos los documentos pertinentes, pues ellos solo tuvieron que firmar en notaría; fue así como se constituyó la empresa denominada TECNICENTRO AUTOMOTRIZ J.L. S.A.S. Finalmente señala que presentó carta de renuncia aduciendo el incumplimiento del contrato y que a la fecha de presentación de la demanda la empresa no le ha pagado lo adeudado.

Con sustento en lo anterior, pretende que se declare la existencia del referido contrato, dentro de los términos indicados en la demanda y que se declare igualmente que su desvinculación obedeció a un despido indirecto sin justa causa y en consecuencia se ordene el pago de todas las prestaciones sociales adeudadas, la indemnización por despido injusto y las sanciones legales ante la falta de pago de la liquidación a la finalización del vínculo y la prevista ante la falta de consignación de las cesantías y que igualmente se condene al reembolso de lo pagado por arrendamiento del local ($3.860.000) y lo pagado por concepto de dotaciones de calzado y vestido de labor, soportados en 7 facturas de venta anexas y al pago de la pensión sanción de que trata el artículo 267 del C.S.T.

La empresa demandada, **POSTOBÓN S.A.**, se opone a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que el demandante prestó sus servicios profesionales en virtud de diferentes contratos de prestación de servicios profesionales, cuyos objetos eran *“reparaciones mecánicas y eléctricas automotriz a vehículos Diesel y gasolina”* Agrega, en cuanto a los extremos temporales de la relación contractual, que la misma no inició en marzo de 1993 y tampoco terminó en diciembre de 2016 y que no fue ininterrumpida, como lo sugiere el demandante, pues tal y como consta en la relación de pagos efectuados por el mismo demandante, cuya copia también se anexa con la contestación a la demanda, la primera factura emitida por el actor data del 27 de enero de 2003 y la última el 10 de marzo de 2014. Finalmente, señala que, a partir de abril de 2014, POSTOBÓN contrató los servicios de mantenimiento y reparación mecánica, latonería, pintura y reparación y soldadura de carrocerías con TECNICENTRO AUTOMOTRIZ J.L. S.A.S.

Seguidamente indica que los servicios contratados por POSTOBÓN únicamente recaían sobre vehículos de su propiedad, de modo que los vehículos de propiedad de distribuidores, que hubieren sido reparados por el demandante, estaban excluidos del contrato de prestación de servicios profesionales. Añade igualmente que no es cierto que el demandante tuviere bajo su responsabilidad la reparación de montacargas y tampoco era la única persona autorizada para llevar a la revisión tecno-mecánica los vehículos de la empresa, ni para llevarlos a NAVITRANS INTERNACIONAL, ni para visitar los proveedores de repuestos. Asimismo, negó que el demandante cumpliera horarios, ya que tenía libertad en la ejecución de las funciones y autonomía en el manejo de los horarios en que prestaba los servicios. Añade que el contrato de arrendamiento que se alude en la demanda, fue suscrito de común acuerdo y el espacio se utilizó como taller para la reparación de vehículos de la empresa y allí el demandante también reparó vehículos de terceros. De otra parte, indica que el demandante no percibía salario sino honorarios profesionales, que se liquidaban, de acuerdo con la cantidad de trabajo efectivamente realizado, incluso había meses en que no facturaba y otros en que facturaba varias veces, tal como consta en la citada relación. Y, finalmente, indica que el demandante junto con otras personas, de forma autónoma y libre, decidió conformar una sociedad para continuar prestándole dichos servicios a POSTOBÓN a partir del 1° de abril de 2014. Como fórmula de la defensa, propuso las excepciones de *“inexistencia de la relación laboral, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo, falta de causa en las pretensiones de la demanda, buena fe, prescripción, compensación e innominada”*

1. **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El *a-quo* declaró que entre las partesexistió contrato de trabajo del 15 de marzo de 1993 al 22 de diciembre de 2016 y en consecuencia condenó a la demandada a pagar al demandante la suma de $70.193.130 por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios y vacaciones e indemnización moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, lo mismo que la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., equivalente a la suma de $21.478 diarios desde el 23 de diciembre de 2016 y hasta que se efectúe el pago total de la obligación reclamada y absolvió de las demás pretensiones.

Para arribar a tal determinación, empezó por indicar que existe abundante material probatorio que da cuenta de la prestación personal de servicios del demandante a la empresa POSTOBON S.A. (en Dosquebradas): en primer lugar, el interrogatorio de parte del representante legal de la sociedad demandada, ROBERTH ANDRES SARMIENTO OCAMPO, quien ha ocupado el cargo desde 2004 (con una interrupción entre 2010 y 2013), y quien dijo conocer al demandante como mecánico de los camiones de la empresa desde 2004, y, en segundo lugar, los testimonios de los señores: LUIS EVENCIO OSPINA LOAIZA, WILSON ALMEIRO TAPIAS INFANTE, PEDRO VERA, LUIS GONZALO RAMÍREZ y ARQUIMEDES LÓPEZ CAÑAVERAL, todos excompañeros de labor del demandante, este último en el cargo de mecánico entre 1994 y 2004, y quienes refieren conocer al demandante como trabajador de la empresa desde 1994 y hasta 2016, lo mismo que los contratos, fracturas y certificaciones aportadas con la demanda.

Seguidamente advirtió que si se mirara exclusivamente la prueba documental, centrando el análisis en las cláusulas de los contratos de prestación de servicios aportados por la empresa demandada, se podría, *prima facie*, concluir que las partes dejaron claro, en los acuerdos contractuales referidos, que su relación obedecía al cumplimiento de las actividades propias que ejecuta el contratista habitualmente para lograr el objeto del contrato, como “contratista independiente” y que actuaba con autonomía. Sin embargo, a juicio del *a-quo*, los testimonios dieron cuenta de que dichas actividades se cumplieron bajo la continua subordinación del contratante, pues los deponentes relataron que el demandante cumplía horario, ya que era la persona encargada de despachar todos los días la flotilla de distribuidores de productos POSTOBON; pedía permiso para ausentarse de su puesto de trabajo; recibía directrices, llamados de atención y hasta regaños del jefe de taller, llamado JOSÉ FERNANDO SALAZAR; además usaba uniformes y herramientas de la empresa, atendiendo solo la reparación de camiones y vehículos de POSTOBON S.A., y, finalmente, estaba obligado a acudir a reuniones y capacitaciones dictadas por personal adscrito a la compañía.

De otra parte, denegó el pago de la indemnización por despido injusto, y con ello la pensión sanción que depende de ella, pues no obra prueba en el plenario de que el demandante hubiere sido despedido y tampoco se acreditó que hubiere presentado renuncia motivada por el incumplimiento del contrato de trabajo por su empleador, en razón de lo cual no puede afirmarse, como lo pide el demandante, que en el presente asunto operó un despido indirecto.

1. **RECURSO DE APELACIÓN**

Contra la anterior decisión interponen recurso de apelación los apoderados judiciales de ambas partes. El demandante, de un lado, solicita la revisión del monto de la condena económica, al considerar que el promedio de ingresos recibidos por el demandante durante lo corrido entre los años 2014 y 2016, fue superior a un salario mínimo, lo cual se acredita con los extractos de los pagos que durante tal lapso le canceló directamente la empresa TECNICENTRO AUTOMOTRIZ J.L. S.A.S. a él, los cuales corresponden a trabajos que efectuó a favor POSTOBÓN S.A., y que obran entre los folios 200-232 y 525-532. De otra parte, insiste en el pago de la indemnización por despido injusto y el consecuente pago de la pensión sanción, al considerar que el propio representante legal de la empresa demandada había reconocido que el actor había dejado de prestar sus servicios luego de que le dijeron que no tenía derecho a reclamar prestaciones labores, con lo cual es claro que el despido fue injusto y estuvo motivado en el incumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del empleador.

De otro lado, la empresa demandada se opone a las declaraciones que derivan en la condena en su contra, pues el convencimiento del juez estuvo basado en certificaciones que carecen de validez y que fueron expedidas por personas que no estaban autorizadas para ello, conforme se acreditó con la prueba documental. Además, al analizar la presencia del elemento de la subordinación en la relación que ató a las partes, el *a-quo* no tuvo en consideración que el demandante era autónomo en la prestación de los servicios mecánicos que ofertaba a la empresa, tanto que pagaba un canon de arrendamiento por el espacio donde tenía su taller al interior de la empresa; “*utilizaba herramientas propias y jamás se le impusieron tareas obligatorias, ni llamados de atención, no tenía un jefe inmediato, sino un coordinador del taller, quien autorizaba las reparaciones a cargo del demandante, para lo cual este respondía a sus propios criterios y al conocimiento del área en la que se desempeñaba”*. Aparte de ello, enfatizó que al demandante nunca se le cancelaron honorarios por quincenas o mensualidades, se le pagaba por las actividades que fuera desarrollando y en varios meses no recibió pagos, de lo que se desprende que sus actividades para la empresa se trataron de labores discontinuas: *“en un mes 1, 2, 3 o más facturas o no presentaba”*, señaló. En conclusión, considera que la sentencia se equivocó al dar por demostrado, sin estarlo, que el trabajador se encontraba bajo el elemento de la subordinación; no dar por demostrado, estándolo, que el demandante ejecutaba un contrato de prestación de servicios; dar por demostrado, sin estarlo, que la simple prestación del servicio es propia y exclusiva del contrato de trabajo; dar por probado, sin estarlo, que la ejecución continuada de un servicio, per se por ese solo hecho configura un contrato de trabajo; no dar por demostrado, estándolo, que también que la ejecución continuada de un servicio también se presenta en contratos de prestación de servicios; no dar por probado estándolo, que los honorarios son la remuneración propia del contrato de prestación; no dar por demostrado, estándolo, que el demandante siempre estuvo consciente de la existencia de un contrato civil, más no laboral, pues nunca reclamó y solo lo hizo al final; no dar por probado, estándolo, que POSTOBON actuó de buena fe, a través de contratos de prestación de servicios y a través de la ejecución de estos en el tiempo.

Finalmente, en cuanto a la condena al pago de la indemnización moratoria y al pago de la condena del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de las cesantías, indica que la buena fe del empleador se encuentra plenamente demostrada en el hecho de que las partes ejecutaron el contrato civil durante el tiempo que perduró la ejecución de servicios, convencidas de que estaban ejecutado un contrato de prestación de servicios. Además, se firmaron los contratos y se realizaron todas las actividades tendientes a revestir de legalidad este tipo de contratación, sin que en ningún momento se pueda pregonar que existió un asomo de mala fe por parte de POSTOBON, pues siempre se actuó bajo el firme convencimiento de que se trataba de un contrato de prestación de servicios y dicho convencimiento se derivaba de la naturaleza misma de los contratos y la forma como se ejecutó y desarrollo el mismo, pues el demandante actuaba en forma independiente, autónoma: era autónomo en sus ingresos y salidas del lugar de trabajo; era autónomo en las decisiones que tomaba con respecto a las tareas encomendadas, en concertar los precios, podía determinar o no el valor del arreglo y si no estaba de acuerdo con el precio, simplemente no realizaba la reparación, de modo que autonomía sí existió y buena fe también.

Agrega que, si se analiza con detenimiento la prueba testimonial, es claro que efectivamente los testimonios de Harold, Wilson y Luis Gonzaga, dejan ver que todas estas actuaciones estaban revestidas dentro del marco de una prestación personal de servicios, la cual no se le impuso al demandante, por el contrario, él, en forma por demás libre y voluntaria, ejecutó dicho contrato con Postobón hasta el final de la relación civil. Incluso, tal y como obra en el expediente, aparece prueba de que el demandante siguió cotizando a través de TECNICENTRO S.A.S. hasta noviembre de 2017, es decir, por 11 meses más, luego de haber dejado de prestar sus servicios mecánicos a POSTOBÓN S.A., en razón de lo cual se pregunta: ¿si la sociedad fue impuesta, como lo afirma la parte actora, qué sentido tenía que una vez el demandante dejó de prestar sus servicios para POSTOBÓN S.A. siguiera realizando las cotizaciones hasta noviembre, es decir, por 11 meses más?; también se pregunta: ¿qué sentido tiene que si supuestamente se obligó al demandante constituir una SAS de la cual era accionista, este no hubiera ni cedido ni vendido las acciones que tenía en TECNICENTRO, si ya supuestamente no existían las razones que motivaron la constitución de la sociedad, y todavía perdurara en el tiempo la personería jurídica y él como accionista?

1. **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN/CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

Analizados los alegatos presentados por escrito por las partes, mismos que obran en el expediente digital y a los cuales nos remitimos por economía procesal en virtud del artículo 280 del C.G.P., la Sala encuentra que los argumentos fácticos y jurídicos expresados, concuerdan con los puntos objeto de discusión en esta instancia y se relacionan con el problema jurídico que se expresa a continuación. Por otra parte, el Ministerio Público no conceptuó en este asunto.

1. **Problema jurídico por resolver**

De acuerdo a la *ratio decidendi* de la sentencia de primera instancia y a los argumentos de la apelación, le corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si existió contrato de trabajo entre JULIO ARLEY y la empresa POSTOBÓN S.A. Definido lo anterior, en caso positivo será necesario entrar a definir si el actor acreditó haber recibido una remuneración superior al salario mínimo entre los años 2014 y 2016 y si, además, demostró que fue injustamente despedido y, en consecuencia, si hay lugar a la indemnización por despido injusto y a la pensión sanción reclamada. Adicionalmente, de confirmarse la viabilidad de la condena económica, se deberá establecer si la demandada actuó de mala fe al negarse al reconocimiento de las prestaciones laborales reclamadas por el gestor de la demanda y, por tanto, si está obligada al pago de las sanciones moratorias impuestas en primera instancia.

Finalmente, **como quiera que ambos extremos de la contienda interpusieron recurso de apelación y el demandante apeló las condenas, la Sala deberá revisar el monto de las mismas, a efectos de verificar si se ajustan a derecho.**

**6. CONSIDERACIONES**

**6.1. CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y DIFERENCIAS CON EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

En procura de resolver el problema jurídico planteado y conforme a los argumentos de la apelación, se encuentra por fuera de discusión que el señor SIERRA prestó servicios personales como mecánico de POSTOBÓN en las instalaciones de dicha empresa en el municipio de Dosquebradas.

Como se ha manifestado en innumerables pronunciamientos de esta colegiatura, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una presunción de subordinación que se activa tan pronto la parte actora prueba que prestó sus servicios personalmente a la parte demandada. Con arreglo a tal presunción, el pretensor se ve relevado de la carga de probar la subordinación, pues de inmediato se produce un traslado de la carga de la prueba a la parte demandada, quien debe demostrar que la relación no era laboral, sino de otra índole.

Como premisa fundamental, es necesario precisar que, contrario a los contratos de trabajo, en los contratos de prestación de servicios no hay subordinación, lo que significa que el prestador del servicio únicamente está obligado a cumplir con el objetivo para el que ha sido contratado, en el plazo acordado y bajo los términos acordados.

Así las cosas, si en el contrato de prestación de servicios no se generan las prerrogativas propias del contrato de trabajo, serán los interesados quienes acuerden en el respectivo contrato, verbal o escrito, aspectos tales como objeto, condiciones y calidad del servicio, sanciones en caso de incumplimiento, el tiempo de ejecución, remuneración por los servicios prestados y demás conceptos, toda vez que la legislación laboral no establece procedimientos ni condiciones especiales en un contrato de prestación de servicios.

Ahora, es claro que si el contrato a realizar cumple con los requisitos para que se genere una relación de tipo laboral, con los elementos contemplados por el artículo 23 del C.S.T, subrogado por el artículo 1° de la Ley 50 de 1990, esto es, *i)* actividad personal del trabajador, *ii)* continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, y *iii)* salario como retribución del servicio, nace entre las partes un vínculo laboral con las respectivas obligaciones que se derivan de todo contrato de trabajo, esto es, el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, seguridad social e indemnizaciones que se causen, al momento de la terminación del contrato de trabajo.

En cuanto al segundo de los señalados elementos, el máximo Tribunal de la Justicia Laboral ha precisado que para establecer si hubo o no subordinación en desarrollo de la prestación de un determinado servicio, se debe verificar, entre otros criterios, por ejemplo: si el prestador de servicios tenía el deber de asistir a reuniones programadas por la empresa; si contaba con disposición de cumplir órdenes cuando se le impartieran; si sus funciones eran similares a las del personal de planta; si la asignación de turnos al prestador de servicios y al personal de planta no se diferenciaba de manera relevante; si el prestador de servicios estaba sujeto al poder disciplinario del favorecido por sus servicios.

Con ánimo de ilustrar, conviene anotar que de acuerdo con la jurisprudencia uniforme de la Sala de Casación Laboral y detalladamente recopilada en la sentencia T-694 de 2010 por la Corte Constitucional, una presunción de ese género no puede entenderse eficaz y necesariamente desvirtuada aun demostrándose los siguientes hechos:

* Que los servicios no fueron prestados en la sede o en las instalaciones del presunto empleador; que los servicios fueron prestados con la ayuda de terceros (sentencia del 30 de agosto de 1991, M.P. Hugo Suescun Pujols, Rad. 4361, Gaceta Judicial Nro. 2453, Tomo CCXIV Segundo Semestre, pp. 303 y ss.)[[2]](#footnote-2);
* Que los instrumentos o las herramientas con las cuales el demandante prestó el servicio eran de propiedad del prestador del servicio y no del presunto empleador (Sentencia del 5 de febrero de 1963, MP. José Joaquín Rodríguez, Gaceta Judicial Nro. 2266, Tomo CI Primer semestre, pp. 573 y ss. y sentencia del 31 de enero de 1991 (MP. Ramón Zúñiga Valverde). Gaceta Judicial Nro. 2449, Tomo CCX Primer semestre, pp. 75 y ss.)[[3]](#footnote-3);
* Que el prestador de servicios no tenía horario, sentencia del 30 de agosto de 1991, M.P. Hugo Suescún Pujols, Rad. 4361, Gaceta Judicial Nro. 2453, Tomo CCXIV Segundo Semestre, pp. 303 y ss.)[[4]](#footnote-4);
* Que los servicios no fueron prestados con exclusividad a pesar de que así se había pactado (Sentencia del 11 de febrero de 1994 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). Gaceta Judicial Nro. 2468, Tomo CCXXIX, Vol. I, pp. 127 y ss.)[[5]](#footnote-5);
* Que el pago por los servicios no era mensual, que el pago no se registraba contablemente como pago de salarios; que las órdenes e instrucciones se le dictaban en lenguaje cortés y amable y que las remuneraciones periódicas efectuadas al prestador del servicio, recibían la denominación de honorarios, y no de salarios[[6]](#footnote-6) (Sentencia del 30 de agosto de 1991, MP. Hugo Suescún Pujols, Rdo. 4361. Gaceta Judicial Nro. 2453, Tomo CCXIV Segundo Semestre, pp. 303 y ss. y sentencia del 11 de agosto de 2004, MP. Camilo Tarquino Gallego, Rdo. 21219);

Cabe agregar que, en el último de los mencionados pronunciamientos, la Corte Suprema decidió desestimar el argumento del recurso porque los medios de prueba que daban cuenta del pago de “honorarios”, sólo informaban algo acerca de las formas, pero nada acerca de la realidad de la relación laboral, razón por la cual no tenían la virtualidad de afectar la naturaleza jurídica laboral del vínculo trabado entre las partes del proceso.

En definitiva, se puede afirmar que cada uno de los mencionados hechos por sí solos no alcanzan a desvirtuar la presunción de subordinación, pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho que, si hay un conjunto de estos hechos, puede desvirtuarse aquella, todo lo cual depende del caso concreto, amén de que pueden existir otras pruebas en el plenario.

Finalmente, es del caso aclarar que la relación de coordinación de actividades entre contratante y contratista que implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un turno o la inversión de tiempo en el desarrollo del objeto contractual, o el hecho de recibir una serie de instrucciones del contratante, o tener que reportar informes sobre sus resultados, no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación, como también se ha precisado con claridad en la jurisprudencia del máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral.

Así las cosas, siguiendo la orientación de la jurisprudencia patria, le corresponde al juzgador revisar las condiciones bajo las cuales fueron prestados los servicios en aras de esclarecer bajo el análisis probatorio crítico y pertinente, la verdadera naturaleza de la relación existente entre las partes, para no adoptar conceptos que, de manera formal y restrictiva, homogenicen las causas propuestas ante esta jurisdicción, en detrimento del análisis sustancial particular que amerita cada caso. Bajo las anteriores premisas, pasaremos al análisis conjunto de las pruebas decretadas y practicadas en primera instancia.

**6.2. CASO CONCRETO**

Sea lo primero precisar que la empresa demandada no desconoce que recurrió a los servicios mecánicos del demandante entre mediados del año 1993 y el 22 de diciembre de 2016, pero asegura que dichos servicios se dieron en el marco de la ejecución de sendos contratos de prestación de servicios, independientes uno del otro, y las actividades contratadas se ejecutaban en tareas específicas encomendadas al contratista y se liquidaban conforme se iba cumpliendo el objeto contratado.

Para abordar el análisis probatorio sobre este específico punto, empecemos por referirnos a los contratos escritos a los cuales alude la empresa, frente a lo cual se puede constatar en el plenario que dichos contratos apenas se empezaron a suscribir a partir del 15 junio de 2007, lo que quiere decir que la contratación del demandante con anterioridad al 15 de junio de 2007 se dio en forma verbal, aspecto sobre el que será necesario volver más adelante. En cuanto a los contratos escritos, los instrumentos aportados al plenario presentan las siguientes generalidades:

1. Se indica en las minutas aportadas por la empresa, que el objeto de cada uno de estos contratos consistía en que el contratista se obligaba para con el contratante a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio contratado, consistente, generalmente, en REPARACIONES MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS AUTOMOTRIZ A VEHÍCULOS DIESEL Y GASOLINA,
2. Que el contratista ocuparía personal seleccionado dentro de los más competentes en cada especialidad, siendo por su cuenta la libre contratación y remoción, así como el pago de los gastos que ellos generen y, además, que se obligaba a remover cualquier empleado u obrero que el contratante le solicitare, quien, a su vez, podía reservarse el motivo de tal solicitud,
3. El contratista se comprometió igualmente a pagar oportunamente al personal todos los salarios, prestaciones, vacaciones y/o indemnizaciones de acuerdo con la ley, así como la afiliación al ISS, a Caja de Compensación, SENA e ICBF y demás obligaciones laborales.
4. Se mencionó que, para todos los efectos legales, el contratista manifestaba que actuaba en calidad de “contratista independiente” respecto del contratante y, se convino, que, si por necesidad el contratista tuviere que utilizar herramientas, locales, etc., de propiedad del contratante, se entendería que los recibió a título de comodato precario, sin que ello desnaturalizara la auténtica voluntad contractual de las partes y, además, en la siguiente cláusula, expresó el contratista que su relación con el contratante, obedece al cumplimiento de las actividades que habitualmente ejecuta el contratista y, por ello, no hay subordinación laboral.
5. Adicionalmente, se desprende como dato de los contratos escritos aportados, que todos ellos se suscribían con un término para el cumplimiento de quince (15) días.

De otra parte, para probar los asertos fundantes de la demanda, el actor llamó a declarar a los señores LUIS EVENCIO OSPINA OSPINA, ARQUÍMEDES LÓPEZ SALAZAR y PEDRO VERA VERA, y el juez de conocimiento llamó de oficio al señor WILLIAM SIERRA, que declararon, en resumen, lo siguiente:

El señor **LUIS EVENCIO OSPINA LOAIZA**, manifiesta que tuvo contacto directo con el demandante y su labor, por lo menos entre los años 1999 y 2007, como conductor de vehículo transportador y conductor de montacargas; puso de manifiesto que el señor JULIO ARLEY SIERRA realizaba actividades relacionadas con la mecánica de automotores en las instalaciones de POSTOBÓN, de manera permanente, exponiendo como razones de su conocimiento, el que durante las ocho (8) horas de los distintos turnos y sitios que debía cubrir como conductor de montacargas, lo veía en esas labores, recibiendo órdenes del Jefe de Taller o de Transportes, esto es, del señor SALAZAR. Agregó que cuando se presentaban emergencias mecánicas dentro de las instalaciones, era objeto de llamados de atención por parte del jefe, dijo expresamente, *“le daban gallina”*, por ejemplo, porque lo requería y no lo encontraba, manifestando que debía estar ahí, siempre disponible. Dijo igualmente que el demandante no actuaba autónomamente porque debía pedir permiso o informarle al jefe para realizar diligencias; que debía estar a las 5:30 a.m., todos los días, para despachar la flota, porque era el mecánico principal. Informó igualmente que cuando le comunicaban al jefe de Transporte un daño en el montacarga, este inmediatamente hacía llamar a Julio para que este fuera a revisar *“a ver qué pasó”, “porque era casi el jefe inmediato, el que daba órdenes de mecánica, cuando no se encontraba el mecánico de los montacargas”*, de lo cual el declarante fue testigo presencial y directo como conductor de montacargas. Aclaró que, a las instalaciones de Postobón, no se podían ingresar vehículos particulares para reparación. Agregó que era obligatorio llevar el uniforme, suministrado por Postobón, pero los mecánicos debían comprarlos; que Postobón les cobraba arrendamiento por el Local, y que para desvarar vehículos fuera de las instalaciones, lo llevaban en camioneta suministrada por Postobón; así como a realizar otras labores dispuestas por el jefe.

El señor **ARQUÍMEDES LÓPEZ SALAZAR**, por su parte, declaró en el mismo sentido del precitado testigo. Dijo que ingresó a laborar a mediados del año 1994 y se retiró en el año 2004, precisando que tenían que madrugar y estar en la Empresa todos los días a las seis (6) de la mañana para despachar la flota, verificar que por la noche llegaran bien los vehículos, pero algunas veces los camiones no prendían por la mañana o tenían una llanta pinchada y si bien es cierto él a veces quedaba libre después de haber colaborado en esa actividad, no sucedía lo mismo con JULIO, porque seguía trabajando en lo que estuviera haciendo pues tenía buen trabajo por ser muy buen contratista y mecánico. Precisó que no se podía decir que no volvía a trabajar o que podía sacar una tarde libre, porque hacía falta en la fábrica para *“desvarar un carro o alguna cosa”*. Agregó igualmente que era el jefe, JOSÉ FERNANDO SALAZAR, el que repartía el trabajo, al que estuviera más desocupado; tenían que comprar los uniformes y pagar un arrendamiento mensual; que les pagaban por lo que hicieran y el monto de la remuneración dependía del estado de la flota. Dijo, de otra parte, que la labor de Julio fue continua y era obligatorio permanecer en el taller; que debía estar disponible por si lo llamaban a una hora determinada en la noche, *“no se podía hacer el pendejo, el bobo, el morrongo, porque se ganaba una sanción”* y la mayoría de las veces iban a desvarar en los vehículos de Postobón. Finalmente aclaró que eran *“mandados”*, no tenían autonomía completa *“o como si fueran los jefes, pues eran subalternos de JOSÉ FERNANDO SALAZAR, quien era el que los mandaba”;* que primero hacían lo ordenado por el jefe de Transportes, luego los llamaban a cuadrar y debían firmar el contrato; y que, para poderles pagar, en una época, tuvieron que afiliarse a la Cámara de Comercio.

De igual manera, **PEDRO VERA VERA**, dijo que inicialmente laboró entre el año 1983 y 1987, y posteriormente, en el año 1993 (precisamente en el año en que ingresó como contratista JULIO ARLEY) que luego se retiró y volvió a reingresar por 30 meses y se retiró definitivamente en el año 2003. Este testigo dijo que Julio empezó a laborar como lubricador y luego como mecánico automotriz, reparando motores, desvarando todo lo que les tocaba *“cuando a JULIO le daban una orden de reparar un motor, lo hacía inmediatamente”*; que las órdenes las daba el jefe de talleres; que JULIO laboraba de lunes a domingo, porque era el encargado de despachar la flota, ingresando a las 6 de la mañana y hasta las 7, 8 o 9 p.m., o la hora que cumpliera la labor. Dijo igualmente que el horario era impuesto por el jefe del Taller, dado que hacía reunión y decía *“hay que estar a las 6 de la mañana y trabajar hasta la hora que toque”*. Agregó que Julio trabajó en forma continua, salvo una incapacidad por un accidente *“que le comentaron”*; que recibía mensualmente como remuneración, entre ochocientos mil, un millón, un millón quinientos mil pesos, pero más adelante aclara que él tenía salario fijo y no sabía cuánto ganaban los demás; que las órdenes que daba JOSÉ FERNANDO SALAZAR, era *“haga tal cosa y se hacía”*. Explicó, además, que les tocaba ir con un uniforme que les vendía la misma empresa, que tenía logos de POSTOBON y que aparte de las labores de mecánica, debía hacer otras labores como *“llevar vehículos a la tecno-mecánica, traer vehículos de Bogotá*” etc., y que laboraba todos los días.

Respecto al testigo citado de oficio por el juzgado, señor **WILLIAM SIERRA**, dijo que laboró entre febrero y diciembre de 2016, y afirmó que a través de su primo, JULIO ARLEY, se enteró de que en Postobón necesitaban un ayudante para labores de mecánica, siendo recomendado ante WILSON TAPIAS, quien lo presentó a HAROLD VALENCIA, Jefe de Talleres, quien, a su vez, lo llevó a la Oficina del señor ROBERT SARMIENTO, pero como no se encontraba, volvieron adonde WILSON TAPIAS, quien le dijo a HAROLD que lo contratara porque le hizo la entrevista y supo que entendía y además lo recomendaba JULIO; que a partir de ese momento quedó a órdenes de WILSON, pero al mando de HAROLD VALENCIA, haciendo funciones de ayudante de mecánica, latonería, pintura, ebanistería, realizando mandados, etc. Agregó que ingresaban a laborar a las 6 a.m., sin horario de salida, porque salían tipo 8 o 9 de la noche, ya que HAROLD VALENCIA le entregaba una lista dirigida a JULIO, para que, por ejemplo, se ocupara de cambiarle 10 llantas a un vehículo, cambiarle el aceite, sincronizarlo, etc.; que a las 5:45 a.m., por lo general, se encontraban con los señores HAROLD VALENCIA y ROBERT SARMIENTO; que sólo madrugaban estas personas, además del señor GUSTAVO, el Gerente, pues los demás iban tipo 7 a.m., a las 8 am.; que llegaban temprano, porque debían revisar los niveles de aceite y agua a los montacargas, iniciar los camiones, con corriente, agua, aceite; les hacían reuniones de seguridad industrial; les exigían tener los uniformes; que a él lo contrató WILSON TAPIAS y era quien le pagaba la nómina y lo afilió a seguridad social; que a JULIO le pagaba WILSON TAPIAS; que JULIO ARLEY faltó 3 días, porque se le murió un familiar en Medellín, con conocimiento de HAROLD VALENCIA, lo cual presenció; que JULIO no podía salir sin permiso. Finalmente precisó que HAROLD VALENCIA, le decía a Julio que viera el carro de placas tal, que le estaba fallando las bandas, o hay que bajarle el clutch, y así.

En cuanto a los testigos llamados a instancia de la parte demandada, en su declaración dijo el señor **HAROLD VALENCIA GIRALDO**, jefe de Transportes, que era el responsable de la designación o la contratación de las tareas del taller, pues su función era la de tener disponibilidad, en el entendido de tener la flota siempre disponible o lista para el trabajo. Señaló que inició labores el 13 de noviembre de 2013, como jefe de taller de vehículos de Postobón. Afirmó que el demandante era técnico o mecánico de camiones y camionetas. Indicó, de otra parte, que sus tareas como jefe de taller, consistían en negociar con los contratistas, entre ellos JULIO ARLEY, la reparación de los vehículos de la empresa; Aclaró que cuando él llegó, sabía que el actor llevaba veinte (20) años trabajando allí, pero desconocía al principio cuál era su forma de remuneración, enterándose después que era bajo *“lista de precios y como persona natural”*. Adicionalmente precisó que, por los descuentos, se les hizo a los mecánicos la propuesta del cambio, conformando TECNICENTRO AUTOMOTRIZ S.A.S., voluntariamente y no obligados, ni por imposición de Postobón S.A.; agregó que ellos mismos (refiriéndose al demandante y los demás mecánicos) eligieron al representante legal de esa empresa. Añadió que una vez conformada la S.A.S., todo siguió igual que antes, se hablaba directamente con quien iba a prestar el servicio, pero se facturaba por la S.A.S. Agregó que asignan o hacen la contratación de la tarea, pues la función es tener disponibilidad, pero que no se dice que tienen que empezar y terminar a tal hora, pues es decisión de cada uno el tiempo en destinan para realizar cada labor; que no dio órdenes ni instrucciones de obligatorio cumplimiento al demandante; que herramientas como llaves de mano, copas, raches, torques, extractores, eran de Julio, y las más especiales, como el taladro de árbol, la prensa, pistola neumática de pulgada, esmeril y un compresor, están instaladas en el taller y las utilizan los contratistas y otras áreas; que le consta que MARITZA CARDONA, contadora de la S.A.S., es independiente de Postobón y no tiene injerencia alguna en el manejo interno de la sociedad y, además, no suministró personal para el cambio. Expresó que los contratistas compraban los uniformes, que podían tener logos diferentes a Postobón S.A.; que JULIO, en el año 2016, tuvo de auxiliar a WILLIAM SIERRA, pagado directamente por él y afiliado a Seguridad Social por TECNICENTRO S.A.S.; sostuvo que JULIO realizaba labores a vehículos que no son de Postobón y pernoctan allí y le pagaban directamente al demandante; que no está autorizado para dar certificados a ninguna persona como jefes de taller, lo cual corresponde a gestión humana; no daba permisos, pero los mecánicos informaban cuando se iban a ausentar, porque era necesario mantener la disponibilidad; que en el 2015, el actor le informó que necesitaba un tiempo para estar en Medellín, de visita donde unos familiar, por 8 días, pero finalmente fue por 15 días; que los vehículos están operativos a las 6:00 a.m. y Julio ingresaba a las seis (6) o seis (6) y ¼, y si llegaba después, no se le hacía llamado de atención, ni lo suspendió ni lo retiró del servicio; que en el taller no hay restricciones para el ingreso y salida de los mecánicos, incluso JULIO almorzaba por fuera y era quien administraba su tiempo para reparar o hacer el mantenimiento de los vehículos, siendo autónomo, sin imponerle hora de ingreso o salida, pero lo importante, dijo, era que se garantizara la disponibilidad de la flota al otro día, y él, como jefe, establecía la prioridad en la reparación y cumplimiento de la fecha de entrega. Finalmente, señaló que la remuneración del demandante era variable y dependía del número de servicios, que estuvo incapacitado, no estaba sujeto a reglamento interno de trabajo, pero si a cumplir normas básicas de seguridad.

El señor **WILSON ALMEIRO TAPIAS INFANTE**, por su parte, dijo que presta servicios para Postobón S.A. desde el año 2005 hasta la fecha de su declaración. Explicó que, a su ingreso, Julio ya laboraba allí, ingresaba tipo 6 a.m., laboraba el día por la necesidad de la empresa para el mantenimiento de los camiones y en algunas ocasiones también reparaba vehículos livianos y los llevaba a la revisión, pruebas técnico mecánicas y garantías; que Julio pasaba cuenta de cobro, que utilizaba herramientas de mano propias, mientras las estáticas eran de la empresa, y las utilizaban tanto los contratistas como los trabajadores de planta. Respecto de la autonomía e independencia del actor, indicó que a su juicio ARLEY era autónomo, pero a renglón seguido aclaró que debían cumplir con una responsabilidad en la empresa; que lo veía entrar a las 6 a.m. y en ocasiones laborando hasta altas horas de la noche, tipo 7 u 8, y se laboraba de lunes a sábado, y ocasionalmente los domingos, por disponibilidad, es decir, por el compromiso con la empresa de mantener la flota funcionando; que estaba a las 6 de la mañana, por la necesidad del proceso de la empresa, para que pudiera salir la flota a entregar el producto; no sabe si le daban órdenes o instrucciones; no sabe por qué razón dejó Arley de prestar el servicio. Narró que, en el 2014, crearon TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JL S.A.S., “*porque como personas naturales, nos dijeron en la empresa que se les incrementaría el pago de la seguridad social, según la asesoría que recibieron, pero sin que Postobón los haya obligado a ello”.* Aclaró igualmente, que, tras la constitución de la sociedad, se siguieron cumpliendo las mismas funciones, esto es, cada uno hacía su trabajo, independientemente, pero se facturaba a nombre de TECNICENTRO S.A.S.; que la supervisión de los trabajos de JULIO, los hace el jefe de transportes, inicialmente JOSÉ FERNANDO SALAZAR, luego CARLOS CARMONA y actualmente HAROLD VALENCIA. Lo atinente al caso de la S.A.S., dijo no tener infraestructura, la dirección que se colocó corresponde a su residencia; que nunca le dio instrucciones directas a JULIO. Dijo que HAROLD era la persona que le indicaba a este qué debía hacer, *“que una cosa, que la otra”*; que TECNICENTRO S.A.S. nunca entregó dotaciones ni herramientas de trabajo a Julio, pues cada uno los compraba; que Julio estuvo incapacitado aproximadamente 3 meses por un accidente en bicicleta. Además, dijo no saber si la contadora trabajaba para Postobón S.A., pero sí que les dio asesoría, realizó las afiliaciones a seguridad social y sigue encargada de esa gestión y ella lo asesora en la mayoría de las cosas; que las personas que aparecen en las fotos aportadas por el demandante son los mecánicos que estaban *“inscritos”* en TECNICENTRO AUTOMOTRIZ S.A.S.; que Julio tuvo un asistente, pagando él los salarios y la seguridad social a través de TECNICENTRO AUTOMOTRIZ S.A.S. Finalmente, dijo que pocas veces lo vio ausentarse, una vez por pocos días, por algo familiar en Medellín.

**LUIS GONZAGA RAMIREZ HINCAPIÉ**, dijo que presta servicios en Postobón S.A. desde hace 8 años. Narró que el actor fue compañero de trabajo como contratista y decidió retirarse; no sabe cuándo ingresó, era mecánico; no lo vio firmando ningún documento; reparaba los carros, salía a almorzar a las 12 o 12:30 a un restaurante cerca de la empresa; utilizaba herramientas de él, como copas, llaves, etc.; la remuneración era variable, porque le pagaban por lo que hiciera; el Jefe, fue antes CARLOS CARMONA y luego HAROLD VALENCIA, eran ellos los que requerían el servicio; no tenía que cumplir horario, si quería venía o no; se ausentó en vacaciones para Medellín, donde la familia, 20 días o 1 mes; no sabe si realizaba trabajos por fuera de Postobón; siempre eran uniformados, aclarando que los uniformes se los compraban a la empresa, pero podían utilizar cualquier uniforme; que Julio tuvo un familiar de colaborador, que él mismo contrató y le pagaba. Narró que JOSÉ FERNANDO SALAZAR, fue jefe de transportes y salió por malos manejos y no sabe si estaba autorizado para expedir certificados. Comentó que practicaba ciclismo con JULIO en semana, quien se accidentó descendiendo de Anserma. Dice el testigo que no tenía que pedir permiso a Postobón, y que cree que JULIO tampoco tuviera que hacerlo. Agregó que cuando en Postobón dijeron que era necesario hacer la S.A.S. Julio era del grupo de ellos, sin embargo, afirmó que Julio administraba su tiempo. Explicó que, si se hubieran negado a constituir la sociedad, la empresa dispondría qué hacer con ellos; aunque reconoció que la sociedad que crearon no cuenta con infraestructura propia y que los asesoró una contadora recomendada por la empresa. Finalmente, explicó que Harold los controlaba, *“porque era el encargado de ellos”*.

De otra parte, obran múltiples autorizaciones emitidas por los distintos jefes de transportes o de taller que ha tenido la empresa, como JOSÉ FERNANDO SALAZAR AGUDELO, obrantes a folios 63, 64, 68, 72, 75, 461; DERLIS GIRALDO ECHEVERRI, visibles a folios 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 460, 467,468; CARLOS ALEXANDER CARMONA; como consta en los folios 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 103, 104, 106, 108, 109, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 124, 128, 129, 130, 131, 133, 487; RUBÉN DARIO ZAPATA PULGARÍN, como obra a folios 126, 127, 484 y HAROLD VALENCIA GIRALDO, visibles a folios 144, para la realización de diferentes actividades de la demandada, incluso ante terceras personas, en los que se autoriza al demandante para recoger vehículos, verificar garantías, realizar pruebas de conducción a los conductores de la empresa, etc.

Fuera de lo anterior, obra en el folio 57, fotocopia del documento suscrito por el señor JOSÉ FERNANDO SALAZAR AGUDELO, como Jefe de Transportes de Postobón/Dosquebradas, en papel membretado con logo de la empresa, con fecha de emisión el 4 de abril de 2001, en la que afirma que el actor prestaba sus servicios en el taller de vehículos de Postobón-Dosquebradas, como mecánico automotriz, desde el 15 de Marzo de 1993; de igual manera, a folio 60, obra fotocopia de constancia en la que el Gerente, Gustavo Restrepo Carvajal, en abril 02 de 2007, afirma que conoce al actor como contratista independiente, con contrato de prestación de servicios en la reparación de los vehículos de la empresa, con un ingreso promedio mensual de un millón cuatrocientos mil pesos ($1.400.000), desde enero 5 de 1997, hasta la fecha (esto es, hasta el 2 de abril de 2007, fecha de emisión de la certificación); a folio 61, está el documento que contiene relación del personal del taller a marzo de 2010, no suscrito por persona alguna, en el que se distingue al personal directo y al personal contratista, y donde figura el demandante. Por último, a folio 486, está la constancia firmada por CARLOS ALEXANDER CARMONA RENDÓN, jefe de Transportes Postobón/Dosquebradas, de fecha abril 20 de 2012, sobre el conocimiento que tiene del aquí demandante, por laborar como mecánico automotriz - contratista independiente, en el taller de vehículos de la planta de Postobón S.A., en Dosquebradas.

De los medios probatorios enumerados hasta este punto, es fácil concluir que el demandante prestó sus servicios personales a la empresa demandada en tareas relacionadas con el mantenimiento y reparación de vehículos de la flota de camiones de POSTOBÓN S.A., pero, además, se pudo establecer que tenía otra serie de funciones asignadas directamente por la empresa, tales como:

1. Despachar diariamente la flota de camiones a las 06:00 a.m., para lo cual debía presentarse a la empresa y pasar revista de los camiones, en caso de que alguno amaneciera varado o pinchado, etc.;
2. Llevar los vehículos de la empresa a la revisión técnico-mecánica; recoger vehículos en los talleres de garantía; recoger repuestos y autopartes comprados por la empresa; tomar improntas y adelantar gestiones ante las autoridades de tránsito, etc. (Fl. 75 y otros)
3. Aparte de lo anterior, se advierte que, en el documento firmado por el jefe de transporte de Postobón, JOSÉ FERNANDO SALAZAR AGUDELO, el 15 de septiembre de 2000, se informa a la Portería de la Empresa, que el señor JULIO ARLEY era la persona *“autorizada para realizar las pruebas de conducción a los conductores de la empresa, en ausencia del jefe de transportes y en los vehículos de la misma”*.
4. Asimismo, se pudo constatar que la prestación del servicio era continua, permanente y de obligatoria disponibilidad para el trabajador, debiendo atender los llamados a desvarar vehículos inmovilizados sobre la vía y atender, con especial premura, los casos priorizados por el jefe del taller, tal como lo reconocieron al unísono la totalidad de los deponentes.

Estos hechos ponen de relieve que el demandante prestó sus servicios de manera continua e ininterrumpida a la empresa demandada, y aunque se diga que hubo meses sin pago y sin contratos de prestación, lo cierto es que las pruebas documentales en tal sentido, no solo se aportaron en forma incompleta por la parte pasiva, sino que se contradicen con los argumentos de la defensa. Nótese que la empresa aseguró que cualquier actividad realizada por el actor era contratada a través del respectivo contrato de prestación de servicios y que los honorarios se cobraban conforme al cumplimiento del objeto contratado y bajo la tarifa de precios unitarios pactada por las partes, pero, para dar un ejemplo, en el año 2008 solo se suscribieron tres contratos, el 15 de enero de 2008 (Fl. 618), y el 16 y 24 de septiembre del mismo año (Fl. 403); sin embargo se le cancelaron al demandante un total de 12 facturas entre febrero y mayo del mismo año, lo cual pone en evidencia que el actor realizaba labores que no estaban necesariamente cubiertas por un contrato de prestación de servicios y que no correspondían a su ejecución.

Ahora bien, respecto de los contratos suscritos por la aquí demandada con la sociedad TECNICENTRO S.A.S., *-que no con el demandante-* (fl.303), de abril 1 de 2014; el firmado en enero 2 de 2015 (fl.308) y el suscrito en enero 2 de 2016 (fl.313), que cubren una parte (la final) del lapso reclamado por el demandante, cabe aclarar que, aunque la demandada señaló que el servicio de mecánica siguió contratándose con la mentada empresa, lo cierto es que el demandante siguió prestando sus servicios sin modificación real en la forma, modo y lugar como venía haciéndolo desde 1993, lo cual se desprende de los siguientes apartados testimoniales:

1. Según lo narrado por el jefe de Transportes, HAROLD VALENCIA GIRALDO, luego de la constitución de esta sociedad, con la innegable asesoría de la demandada, como bien lo anotó el *a-quo*, la forma de contratar siguió siendo la misma, es decir, se hablaba directamente con la persona que iba a realizar el servicio, pero se facturaba bajo la fachada de la S.A.S.
2. En cuanto al actor, expresó el citado testigo, que en el mes enero –se entiende del 2017-, el actor le dijo que sí podía volver, petición que se la informó al señor ROBERT (representante de POSTOBON), quien a pesar de recordar que nadie lo sacó, y que se había ido por decisión propia y no de la empresa, le dio el visto bueno para que volviera. El demandante así lo hizo, con su overol y herramienta laborando aproximadamente un mes, hasta que finalmente dijo que se iba del todo. Lo anterior, contradice la tesis de la defensa, porque si el actor supuestamente era socio de TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JL SAS, en realidad no requería autorización de la empresa POSTOBÓN para ingresar a realizar las reparaciones mecánicas que supuestamente se contrataban con TECNICENTRO.
3. El señor WILSON ALMEIRO TAPIAS INFANTE, representante legal de la sociedad TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JL S.A.S., afirmó que las labores las direcciona el señor HAROLD VALENCIA a los mecánicos de los vehículos, quienes las ejecutan luego de recibidas. Respecto del señor WILLIAM SIERRA, aceptó que fue el propio HAROLD quien le insinuó que lo contratara porque fue recomendado por JULIO, además de que ya lo había entrevistado y entendía la labor, similar a lo que ocurrió cuando en el año 2017, regresó el actor, con el visto bueno del Jefe de Transportes y con la aprobación del Gerente de Operaciones de Postobón. Dijo además este testigo que, como representante legal de la sociedad TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JL S.A.S., nunca dio instrucciones directas al demandante, pues éstas las daba HAROLD VALENCIA.

Analizado lo anterior, no resulta lógico que, al constituirse una sociedad, como TECNICENTRO S.A.S., con la finalidad de contratar los servicios de reparación y mantenimiento de los vehículos de POSTOBÓN S.A., los socios de la nueva sociedad continuaran actuando bajo las directrices de POSTOBÓN, incluso siendo contratados directamente por el jefe de transportes de POSTOBÓN, y que la única diferencia sea que en la factura aparece como beneficiaria del pago la S.A.S. y no el trabajador. Además, tampoco suena lógico que el ingreso o el reingreso de los mecánicos a la empresa no se haga a través de la SAS contratada para el arreglo de los vehículos, sino a través del mismo jefe de transporte o el gerente de operaciones, quien, por ejemplo, permitió que el actor retomara sus labores en 2017, luego de haber dejado de prestar el servicio por un corto lapso, cuando ello correspondía a la esfera de la SAS de la cual era socio el demandante.

En suma, de lo dicho hasta este punto se concluir que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas revela que en este caso se presentó una verdadera relación laboral entre las partes, que se camufló con contratos de prestación de servicios e incluso con la creación de una sociedad contratista, que a la postre resultó ser una fachada para esconder la verdadera relación laboral entre la empresa y los mecánicos encargados de la reparación de sus vehículos, por las siguientes razones:

1. Toda la defensa de la empresa se direcciona a asegurar que la relación entre las partes fue de carácter civil y comercial, pero dadas las particularidades de este caso, el hecho de que el actor se viera obligado a suscribir contratos de prestación de servicios profesionales, presentar cuentas de cobro con el respectivo descuento de la retención en la fuente, afiliarse a la seguridad social como independiente, o prestar el servicio a partir de 1º de abril de 2014 a través de la sociedad TECNICENTRO AUTOMOTRIZ JL S.A.S., sociedad a quien se exigió pagar un canon de arrendamiento por un precio realmente irrisorio para operar en el mismo sitio donde siempre prestó sus servicios el demandante, o que supuestamente prestara servicios a terceras personas, lo cual no fue demostrado de ninguna manera por la parte pasiva; no son hechos que el empleador pueda esgrimir para fundar su convicción sobre la naturaleza del vínculo, pues lo que se infiere es que dicha modalidad fue impuesta por la empresa al trabajador para que obrara de este modo.
2. De otra parte, los testimonios de los deponentes que afirman que el demandante era contratista independiente, tampoco pueden entenderse como determinantes de la alegada relación civil, pues nótese que dicha afirmación no guarda correspondencia con las circunstancias que ellos mismo narraron: de un lado el señor HAROLD VALENCIA enfatizó la exigencia de disponibilidad del prestador del servicio y la obligación de mantener en óptimas condiciones el parque automotor de la empresa y, de otro lado, el señor WILSON ALMEIRO TAPIAS INFANTE, representante legal de la empresa TECNICENTRO, terminó aceptando que nunca le dio instrucciones directas al demandante acerca de sus funciones y tareas como mecánico de los vehículos de Postobón, pues ello le correspondía al señor Harol Valencia, como jefe de taller de dicha empresa, lo cual pone de relieve la dependencia y la subordinación del actor frente a los representante y empleados de planta de POSTOBÓN.
3. Con relación a la continuidad del vínculo, en el contexto reconstruido a través de las múltiples evidencias presentadas por las partes, le resulta imposible a la demandada demostrar que la relación contractual sufrió varias interrupciones en el tiempo, ni siquiera por razón de la relación de pagos efectuados al demandante o, porque no todos los días tenía actividades para ejecutar y no facturaba, como esgrimió en su defensa, por las siguientes razones: a) Porque de la prueba testimonial se desprende la continuidad en la prestación del servicio por parte del señor JULIO ARLEY, todos los días de la semana, incluso algunos días domingos, como lo dijo el testigo, WILSON ALMEIRO TAPIAS INFANTE, quien indicó que ocasionalmente había que hacer un domingo por “disponibilidad”, por el compromiso con la empresa de mantener la flota funcionando, salvo cuando el demandante tuvo un accidente en bicicleta, tiempo durante el cual no prestó el servicio con permiso o autorización del Jefe de Transporte y cuando, de igual manera, este último lo autorizó para asistir a Medellín a atender una calamidad doméstica por grave enfermedad o muerte de un familiar; b) porque la discontinuidad en la suscripción en los contratos y en los pagos, no afecta la conclusión en cuanto a la permanente y continua prestación del servicio, máxime cuando, como ya se dijo, los contratos aportados por la parte demandada no son todos los que se suscribieron ni estos se suscribían por cada una de las actividades realizadas por el actor, en tanto que aparecen pagos no sustentados en los supuestos contratos de prestación de servicios profesionales.
4. De todo lo dicho hasta este punto se puede concluir, que la función del actor era permanente, direccionada por el Jefe de Transporte al cumplimiento de su función primordial, cuestión que indefectiblemente tenía que ser así para mantener en disponibilidad la flota de vehículos transportadores que, conforme a la prueba documental traída al plenario, no era escasa sino amplia, y por ello, se lo consideraba como mecánico de confianza, como lo indicó el juez de primera instancia, y como se registra en las constancias de folios 58 y 59, o como *“… el mecánico de Postobón…”* (constancia fl 460) , o como *“funcionario de Postobón”* (fl.123). Por otra parte, no sólo se le exigía el cumplimiento de los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos a gasolina y diésel, sino de servicios de naturaleza diferente, como atrás se indicó, todos a favor de POSTOBÓN, por ejemplo, realizar pruebas de conducción a los conductores de la empresa (fl.63), recibir vehículos para Postobón (Fls. 64, 72 a 74, 77, 93); reclamar o recibir repuestos de distintos proveedores (Fls. 65 al 67, 78, 79, 87, 95, 96, 98 a 102, 105, 107, 110 al 113, 116, 118, 122,123, 125, 132, 134 a 143, 145 a 149); entregar vehículos de Postobón para revisión técnico-mecánica u otras situaciones (Fls. 68, 69 al 71, 80, 81,82,86, 90, 91, 92, 94, 97, 103, 104, 106, 108, 109, 114, 115, 117, 119 al 121, 124, 126 al 130, 133); salir en vehículo de Postobón a movilizar al auditor a la Agencia de Anserma (Caldas) y tomar improntas a los vehículos para trámites y gestiones ante tránsito (Fl.75); desplazar al señor Arcadio Álzate Valencia a Busscar de Colombia, llevando arena y cemento para trabajo para facilitar el saneamiento a dispensadores de agua (Fl. 76); ingresar al Taller vehículos en octubre 10, 24 y 31 de 2010, precisamente días domingo, en que se tenía disponibilidad, según el testigo WILSON OLMEIRO TAPIAS INFANTE, así como en noviembre 1°, lunes festivos de 2010, 14 y 21 de noviembre de 2010, domingos, el 20 de mayo de 2012, a laborar (Fls. 83 a 85, 88, 89, 131); autorizaciones para salida de repuestos para reparación taller externo (Fl.181 al 198), etc., etc.

Finalmente, el hecho de que el demandante haya pagado arrendamiento del taller o el espacio donde realizaba las reparaciones de los vehículos de POSTOBON no es necesariamente indicativo de autonomía e independencia en la prestación del servicio de mecánica automotriz, al contrario, lo que demuestra es la exigencia de permanente disponibilidad, al punto que el demandante debía efectuar las reparaciones dentro de la misma empresa, con herramienta liviana propia y con maquinaria y herramienta de la empresa, instalada justamente en el espacio alquilado por el demandante. Aparte de eso, el precio que pagaba por el alquiler del lugar era a todas luces simbólico, no representativo, pues su monto no superaba los $20.000 pesos, cifra que no se compadece con el número de servicios y la facturación mensual del demandante, que oscilaba entre $1.500.000 y $2.000.000 de pesos. No hay que se ser un experto en bienes raíces para saber que el costo de arrendamiento de una bodega donde quepa un camión está muy por encima de los $20.000 que mensualmente pagaba por ese concepto el demandante a la empresa demandada.

En fin, todo confluye a la confirmación de la decisión atacada, pues como bien lo concluyó el operador de primera instancia, a pesar de los aspectos resaltados como indicadores de autonomía e independencia por la empresa demandada, lo real y verídico, lo que efectivamente ocurrió entre las partes, conlleva la satisfacción de los elementos esenciales de un contrato de trabajo, ya que al final de cuentas, el trabajador, se itera, se vio compelido o empujado a participar de esos aspectos como suscribir contratos, presentar cuentas de cobro o facturas, pagar arrendamiento por el local o taller, comprar uniformes, etc., porque disimuladamente se le hizo creer que efectivamente era un contratista autónomo e independiente, lo cual a todas luces no era real.

En relación con el salario devengado, en ausencia de prueba directa sobre su monto, coincide la Sala con el *a-quo*, en el sentido de acudir a la relación de pagos efectuados por la demandada al demandante, para obtener el promedio mensual para cada anualidad, y, en consecuencia, los períodos anuales en que no se logre establecer por lo menos el salario mínimo legal mensual vigente, se tendrá este como la base de la respectiva liquidación. En cuanto a la prescripción, como se estableció en primera instancia, tal excepción resulta próspera respecto de los créditos causados antes del 12 de julio de 2014, teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 12 de julio de 2017, excepto respecto de las cesantías, cuyo término prescriptivo se cuenta a partir de la terminación del vínculo, esto es, a partir del 23 de diciembre de 2016 y de las vacaciones, pues conforme a precedente consolidado de esta sala, con apoyo en jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, opera tal fenómeno sobre las causadas por fuera de los cinco (5) años anteriores a la reclamación, que incluyen dos años para que el trabajador las solicite, el empleador las conceda si no han sido pedidas por el actor, y los tres (3) años de prescripción, legalmente establecidos.

Ahora bien, aduce el demandante que obra en el plenario prueba de los pagos efectuados por TECNICENTRO S.A.S., los cuales, evidentemente, corresponden al pago de las actividades específicas que este prestó como mecánico de POSTOBÓN S.A., de modo que, con sustento en esta documental, se reajustará el monto de lo adeudado, no sin antes aclarar que la prueba documental en tal sentido da cuenta de que el actor devengó más de un salario mínimo el último año de servicio (específicamente del 15 de febrero al 22 de diciembre de 2016, fecha del retiro de la empresa), de suerte que las prestaciones sociales de ese lapso (primas, cesantías, intereses a las cesantías), lo mismo que las vacaciones y las indemnizaciones moratorias, tanto por el omitido pago de las cesantías como por la falta de liquidación oportuna de las prestaciones sociales, han debido liquidarse con el salario real, que, como ya se indicó, es superior al mínimo, conforme se evidencia en el cuadro 1.

Cabe aclarar que conforme a los pagos efectuados cada año, cuyos valores se extraen del contenido de las facturas y cuentas de cobro aportadas al proceso, el salario promedio de los años 2014, 2015 y 2016, ascendió a las sumas de $1,269,684, $913,667 y $1,034,783, respectivamente.

Ello así, por concepto de las primas de servicio causadas entre el 12 de julio de 2014 y el 22 de diciembre de 2016, se adeuda al demandante la suma de $2.521.501; por concepto de intereses a las cesantías $380.719; por concepto de vacaciones $2.473.420; y, por las cesantías de toda vida laboral $25.344.854, para un total de $31.394.132 por concepto de prestaciones sociales y vacaciones, conforme al cuadro 2:

Cuadro 1.

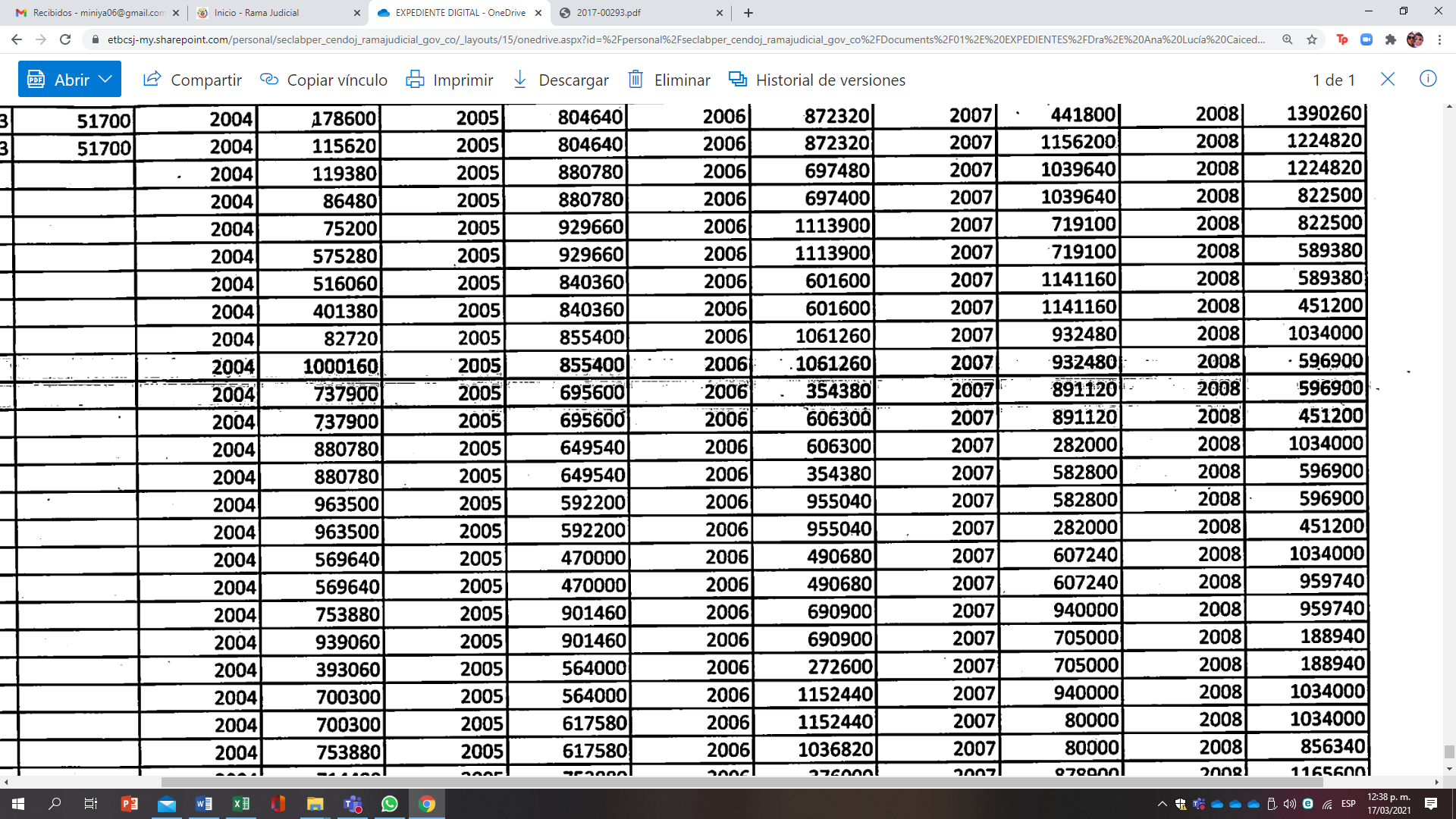
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **DIAS LABORADOS** | | **SALARIO** | **CESANTIAS** | **INTERES CESANTIAS** | **PRIMA** | **VACACIONES** | **VALR PRESTCNES Y DESCANSO REMUNRADO** | **PREESCRITO** | **VALR DESCONTDO PREESRIPCIN** | **OBS.** |
| 1993 | 286 | | $81,510 | $64,755 | $6,173 | $64,755 | $32,378 | $168,061 | $103,306 | **$64,755** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 1994 | 360 | | $98,700 | $98,700 | $11,844 | $98,700 | $49,350 | $258,594 | $159,894 | **$98,700** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 1995 | 360 | | $118,934 | $118,934 | $14,272 | $118,934 | $59,467 | $311,607 | $192,673 | **$118,934** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 1996 | 360 | | $142,125 | $142,125 | $17,055 | $142,125 | $71,063 | $372,368 | $230,243 | **$142,125** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 1997 | 360 | | $172,005 | $172,005 | $20,641 | $172,005 | $86,003 | $450,653 | $278,648 | **$172,005** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 1998 | 360 | | $203,825 | $203,825 | $24,459 | $203,825 | $101,913 | $534,022 | $330,197 | **$203,825** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 1999 | 360 | | $236,438 | $236,438 | $28,373 | $236,438 | $118,219 | $619,468 | $383,030 | **$236,438** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 2000 | 360 | | $260,100 | $260,100 | $31,212 | $260,100 | $130,050 | $681,462 | $421,362 | **$260,100** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 2001 | 360 | | $286,000 | $286,000 | $34,320 | $286,000 | $143,000 | $749,320 | $463,320 | **$286,000** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 2002 | 360 | | $309,000 | $309,000 | $37,080 | $309,000 | $154,500 | $809,580 | $500,580 | **$309,000** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 2003 | 360 | | $332,000 | $332,000 | $39,840 | $332,000 | $166,000 | $869,840 | $537,840 | **$332,000** | SALARIO MINIMO VIGENTE |
| 2004 | 360 | | $974,310 | $974,310 | $116,917 | $974,310 | $487,155 | $2,552,692 | $1,578,382 | **$974,310** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 |
| 2005 | 360 | | $1,681,090 | $1,681,090 | $201,731 | $1,681,090 | $840,545 | $4,404,456 | $2,723,366 | **$1,681,090** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 |
| 2006 | 360 | | $2,156,817 | $2,156,817 | $258,818 | $2,156,817 | $1,078,408 | $5,650,860 | $3,494,043 | **$2,156,817** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 |
| 2007 | 360 | | $1,829,037 | $1,829,037 | $219,484 | $1,829,037 | $ 914,518 | $4,792,076 | $2,963,039 | **$1,829,037** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 |
| 2008 | 360 | | $2,239,280 | $2,239,280 | $268,714 | $2,239,280 | $1,119,640 | $5,866,912 | $3,627,633 | **$2,239,280** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 |
| 2009 | 360 | | $2,214,044 | $2,214,044 | $265,685 | $2,214,044 | $1,107,022 | $5,800,794 | $3,586,751 | **$2,214,044** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 |
| 2010 | 360 | | $1,671,907 | $1,671,907 | $200,629 | $1,671,907 | $ 835,953 | $4,380,395 | $2,708,489 | **$1,671,907** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 |
| 2011 | 360 | | $1,833,794 | $1,833,794 | $220,055 | $1,833,794 | $ 916,897 | $4,804,540 | $2,970,746 | **$1,833,794** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 |
| 2012 | 360 | | $2,693,802 | $2,693,802 | $323,256 | $2,693,802 | $1,346,901 | $7,057,761 | $4,363,959 | **$2,693,802** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 |
| 2013 | 360 | | $2,631,753 | $2,631,753 | $315,810 | $2,631,753 | $1,315,877 | $6,895,194 | $4,263,440 | **$2,631,753** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 |
| 2014 | 360 | | $1,269,684 | $1,269,684 | $152,362 | $1,269,684 |  | $2,691,730 |  | **$2,691,730** | SUMA DE PAGOS FL 273-284 HASTA EL 31/03/ Y DE 01/04 A 31/12 FL 303-307 |
| 2015 | 360 | | $913,667 | $913,667 | $109,640 | $913,667 |  | $1,936,973 |  | **$1,936,973** | CONTRATOSERVICIOS Y ANEXOS FL308-312 |
| 2016 | 352 | | $1,034,783 | $1,011,788 | $118,716 | $1,011,788 | $2,473,420 | $4,615,712 |  | **$4,615,712** | CONTRATO SERVICIOS Y ANEXOS FL313-317 |
| **SUBTOTALES** | | | 0 | $25.344.854 | $3.037.087 | $25.344.854 | $13.548.277 | $67.275.071 | $35.880.940 | **$31.394.131** |  |
|  | |

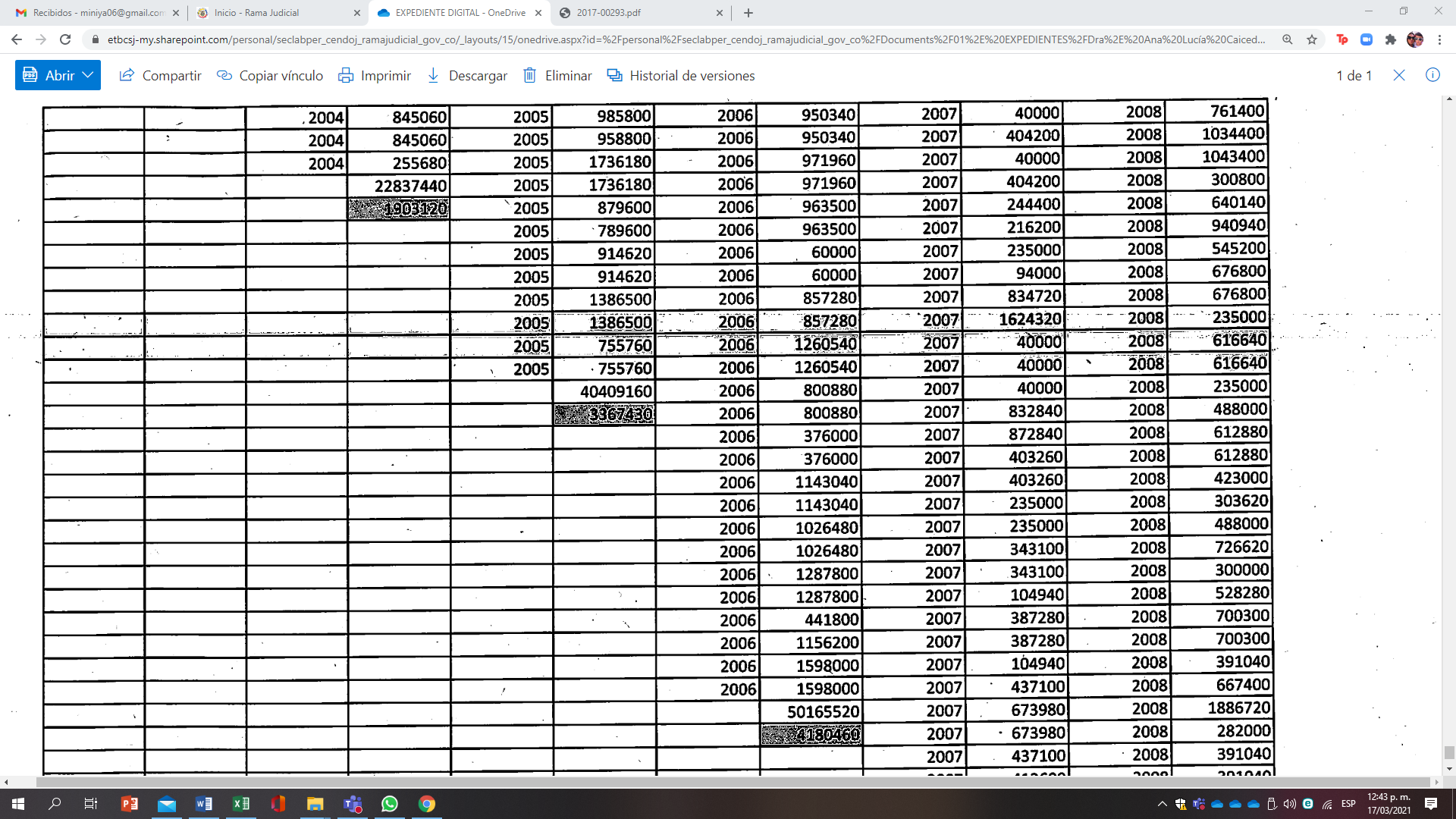
Cuadro 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VALORES FALLO SEGUNDA INSTANCIA | |  |
| CESANTIAS |  | $ 25.344.854 |
| INTERES CESANTIAS |  | $ 380.719 |
| PRIMA |  | $ 2.521.501 |
| VACACIONES |  | $ 2.283.707 |
| INDEMNIZACION |  | $ 22.970.000 |
| INDEMNIZACION |  | $ 42.542.236 |
| TOTAL | | $ 96.043.017 |

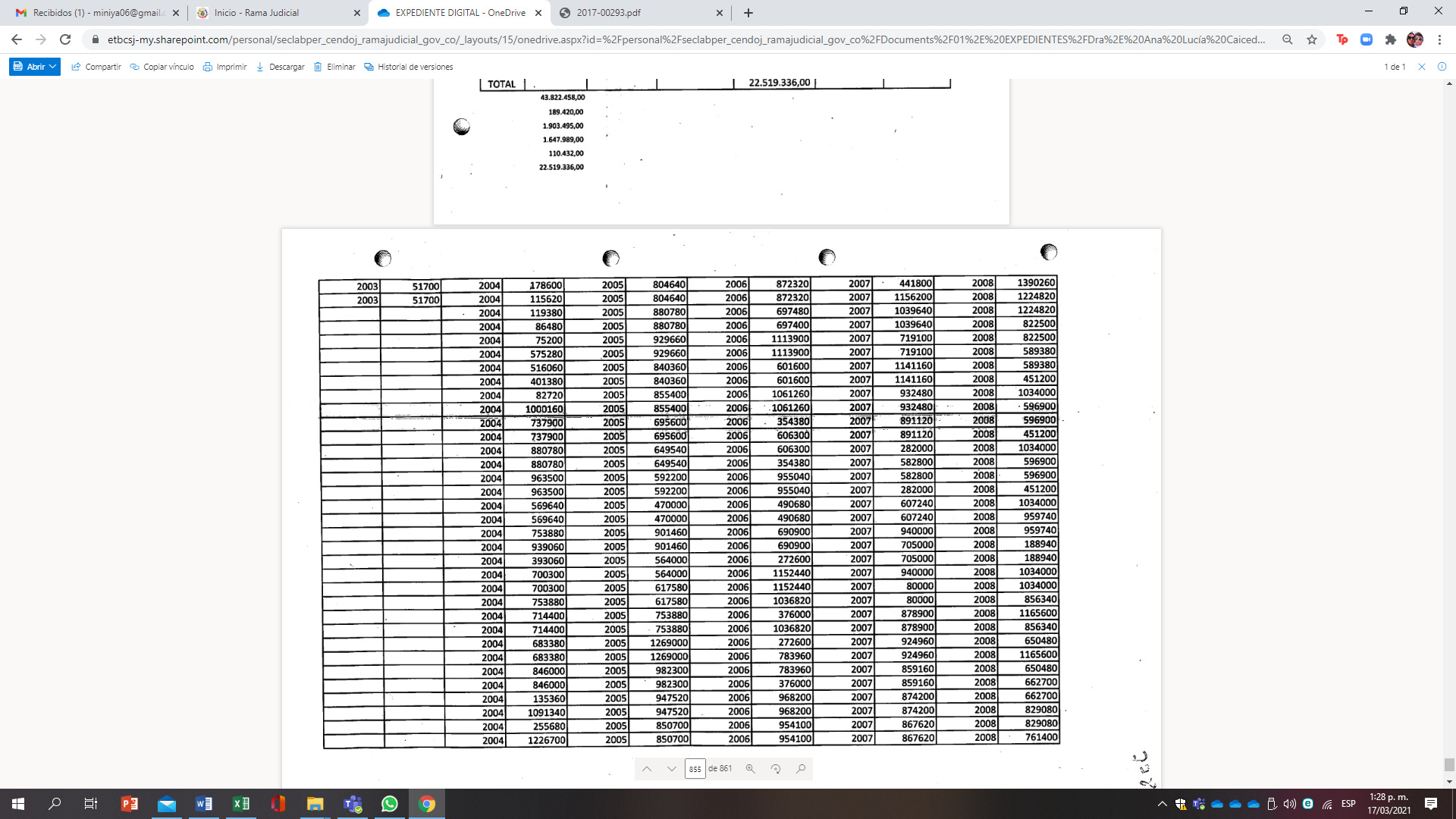
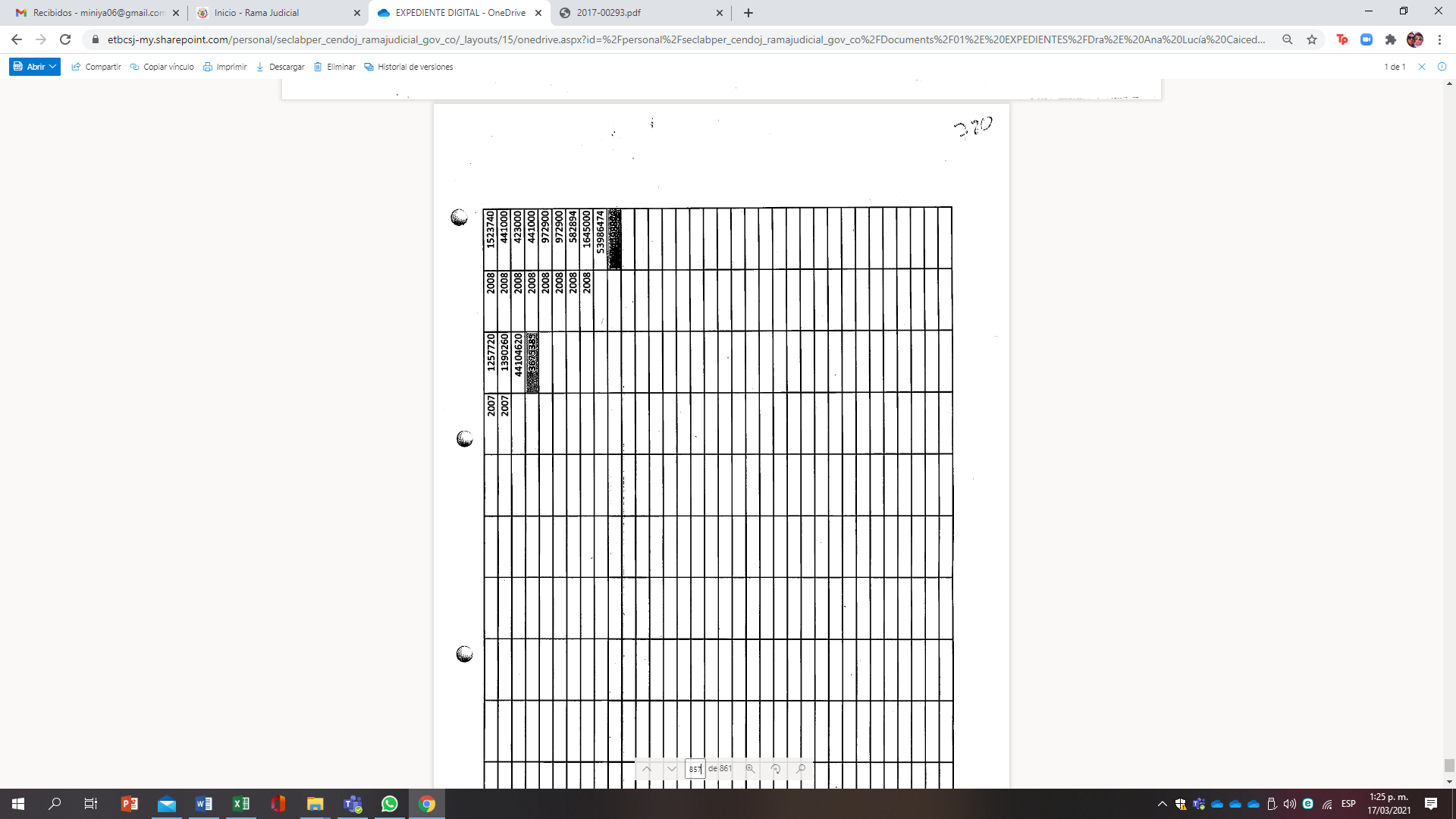
Hay que advertir que la diferencia entre la liquidación efectuada por esta Sala y la realizada por el Juzgado de primera instancia estriba en que se evidencia que para realizar la liquidación correspondiente al folio 777 (anexo de la sentencia de primera instancia) se tomó la prueba documental 6.1 “Copia simple de la relación de pagos efectuados al demandante por parte de POSTOBON (12 folios)” folio electrónico N º312-323, el cual relaciona no solo lo facturado por el señor Julio Arley Sierra, sino también los respectivos pagos por lo facturado, lo cual genera confusión al realizar la liquidación para hallar los salarios promedios de los años 2004-2014 porque el A-quo tomó ambos valores como pagos independientes, duplicando así los salarios realmente devengados. Igualmente esta Sala encuentra otros errores que influyen en la cuantificación real de los salarios, a saber: 1) Contiene algunos números inversos; 2) valores repetidos que ya se encontraban digitados y los incluyen nuevamente, dando como resultado tres (3) veces los mismos valores; 3) Los pagos que se facturaban a final de año y eran cancelados al año siguiente por la empresa son liquidados como pagos independiente en la liquidación realizada por el a-quo, es decir, estos valores fueron tomados en ambos años y el pago fue solo uno; 4) para el año 2014 los primeros valores están doblados (fl.781) y los siguientes a partir de abril 2014 hasta el año 2016 son los relacionados en los contratos de prestación de servicios para el año 2014 tal como se prueba con la imágenes tomadas de la los folios electrónicos N.º 854-860 del expediente digital.

Punto N.º 1 y 2

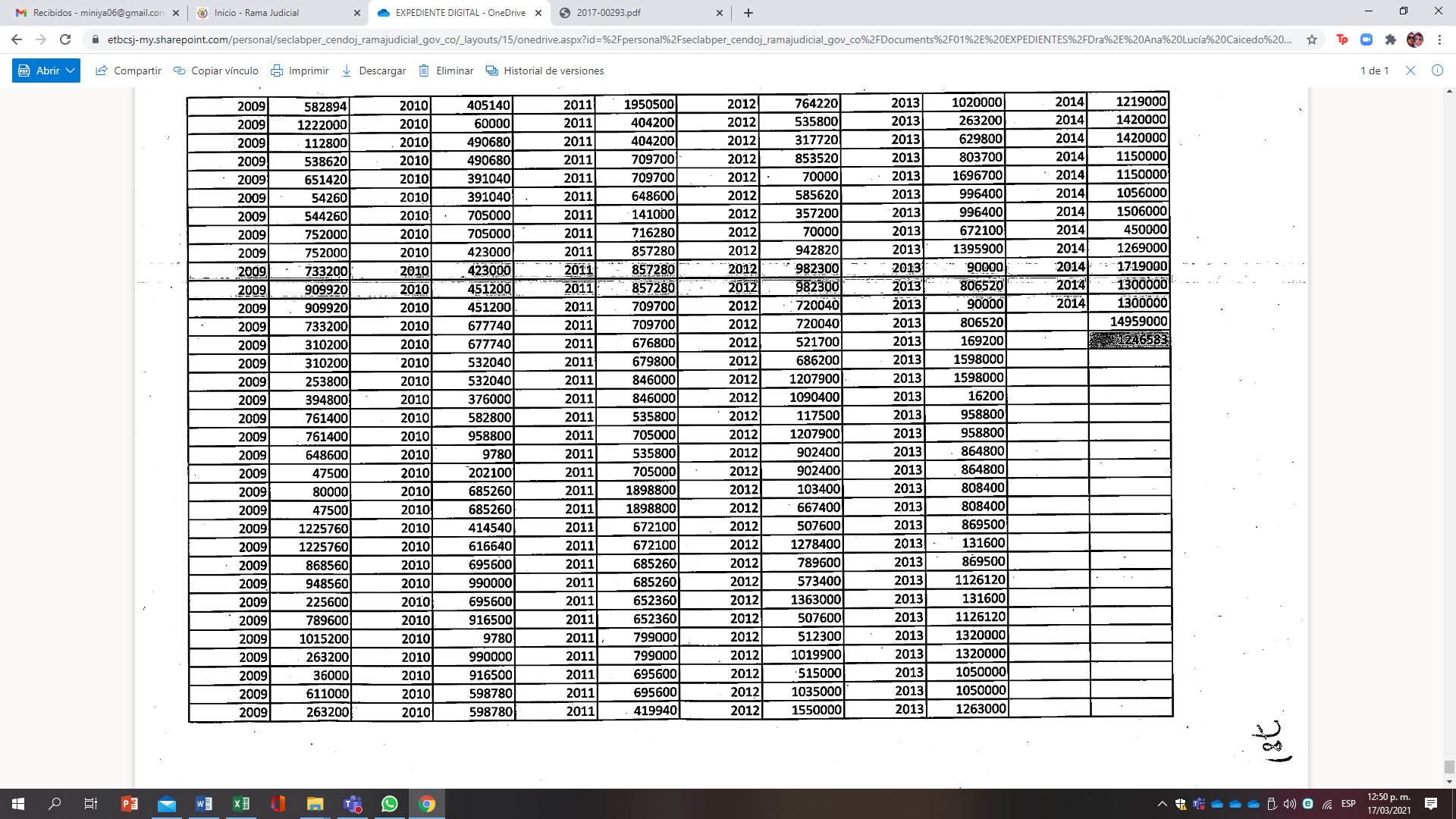




Punto 3.



Punto 4.



Los errores de primera instancia se pueden observar más detalladamente en la liquidación anexa a esta providencia.

En lo que atañe a la indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, se encuentra que las misma se causó por la omisión del pago de las cesantías de 2013, que debían consignarse a más tardar el 15 de febrero de 2014, y que se causa desde el 12 de julio de ese año, pues se encuentra prescrita la sanción moratoria hacía atrás, como se indicó en precedencia, lo que asciende a la suma de ($18.685.443); por las de este último año (2014), que han debido consignarse el mismo día y mes de 2015 ($15.236.208), y por las de este último año (2015), pagadera a más tardar el 15 de febrero de 2016 y que causó hasta el 22 de diciembre de ese año, fecha de finalización del contrato de trabajo ($8.620.578), lo que asciende a la suma de **$42.542.236.** No ocurre lo mismo por lo corrido del 2016, pues habiendo finalizado el vínculo antes del 15 de febrero del año siguiente, no existía la obligación de consignar ese año sino de pagarlo directamente al trabajador. Todo lo anterior, conforme al cuadro 3.

Cuadro 3.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SANCION POR LA NO CONSIGNACION DE LAS CESANTIAS DE LOS AÑOS 2014-2015** | | | | | | |
| **AÑO** | **fecha inicial** | **fecha final** | **DIAS MORA** | **VR SALARIO** | **VR DIA SALARIO** | **VR INDEMNIZACION** |
| 2013 | **12/07/2014** | **14/02/2015** | **213** | **$ 2.631.753** | $ 87.725 | $ 18.685.449 |
| 2014 | 15/02/2015 | 14/02/2016 | **360** | **$ 1.269.684** | $ 42.323 | $ 15.236.210 |
| 2015 | 15/02/2016 | 22/12/2016 | **308** | **$ 839.667** | $ 27.989 | $ 8.620.578 |
| **TOTAL** | | | |  |  | **$ 42.542.236** |

De otra parte, en lo que atañe al reajuste de los aportes pensionales, el empleador deberá asumir el porcentaje que le corresponda sobre los salarios actualizados conforme a lo realmente devengado por el actor en cada mensualidad, lo cual resulta de dividir, a partir del año 2004 (año a partir del cual se acreditó documentalmente el pago de un salario superior al mínimo legal vigente) la suma que corresponde al promedio del salario anual, tal como se ordenó en primera instancia, y conforme al cuadro que se visualiza precedentemente, en el cual se refleja y discrimina el promedio salarial año a año[[7]](#footnote-7)

Finalmente, se confirmará la decisión de negar la indemnización por despido injusto y la consecuente pensión sanción, por cuanto no obra prueba alguna de que la causa de la terminación del contrato obedezca al incumplimiento del contrato por parte del empleador, pues no existe documento alguno, confesión o siquiera mención de los testigos en cuanto a que el actor puso en conocimiento de la empresa las razones que lo llevaron al renunciar; al contrario, como lo indica el señor HAROLD VALENCIA, el demandante no volvió a prestar sus servicios a POSTOBÓN y unos meses después pidió retorno a sus labores, autorizándose su reingreso, volviendo a trabajar por unos cuantos días, para luego no volver.

En lo que respecta a la indemnización moratoria, la Sala no encuentra razones para revocar dicha sanción, pero si para modificarla, pues en el caso objeto de estudio, bien se ve que las circunstancias que lo rodearon no daban para que la naturaleza del contrato fuera discutible, toda vez que a las claras la relación que existió entre las partes en contienda se tornaba de carácter netamente laboral desde el principio, en razón a las actividades desarrolladas por el demandante, que no sólo denotan tareas propias de un trabajador sino que eran indispensables para la empresa, las cuales fueron ejecutadas por un periodo considerable de tiempo, bajo la continua dependencia y subordinación de la empresa demandada; relación laboral que, valga anotar, se ocultó bajo la denominación de contratos de prestación de servicios, con el propósito de eludir el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales o convencionales que se generan en favor del actor, quien por demás debía estar disponible para cumplir las tareas encomendadas por la demandada. Sin embargo, la condena deberá modificarse por cuanto quedó probado en el proceso que el demandante tuvo una remuneración superior al salario mínimo, y en ese sentido, como la demanda se presentó dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la fecha de terminación del vínculo laboral, el actor tiene derecho al pago de un día de salario por cada día de retardo en el pago de lo adeudado por concepto de prestaciones sociales desde la terminación del contrato y a partir del mes veinticinco (25), tendrá derecho al pago de intereses moratorios a la tasa máxima de usura sobre el importe de lo adeudado por concepto de prestaciones sociales. Ello así, por lo corrido entre el 23 de diciembre de 2016 y el 22 de diciembre de 2018, tiene derecho a la suma de $22.970.000, a partir del 23 de diciembre de 2018, y hasta que se verifique el pago de las prestaciones sociales adeudadas, la empresa demandada deberá seguir pagando intereses, conforme se explicó en precedencia, conforme a los factores y valores detallados en el cuadro 4.

Cuadro 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SANCION POR NO PAGO PRESTACIONES ART 65** | | | | |
| **AÑO** | **DIAS MORA** | **VR SALARIO** | **VR DIA SALARIO** | **VR INDEMNIZACION** |
| 2016 | 720 | $ 957.083 | $ 31.903 | $ 22.970.000 |
| **TOTAL** | | | | **$ 22.970.000** |

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Risaralda)**, **Sala Laboral No. 1**, Administrando Justicia en Nombre de la República y por autoridad de la Ley,

**R E S U E L V E:**

**PRIMERO**. - **MODIFICAR** el numeral SEGUNDO de la sentencia objeto de apelación, en el sentido de condenar al pago de la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($72.573.798),** por concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones compensadas e indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, conforme a los cálculos detallados en precedencia.

**SEGUNDO. – MODIFICAR** el numeral CUARTO de la sentencia objeto de apelación, en el sentido de condenar a la demandada a pagar al demandante la indemnización prevista en el artículo 65 del C.S.T., a partir del 23 de diciembre de 2016 y hasta el 22 de diciembre de 2018, a razón de $34.492 pesos diarios, correspondiente al último salario ($957.083), para un total de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($22.970.000), y a que siga pagando, a partir del 23 de diciembre de 2018 y hasta que se haga efectivo el pago de lo adeudado por concepto de prestaciones en dinero, intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la superintendencia financiera, calculados sobre el importe de la obligación correspondiente a las primas, cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones.

**TERCERO. – MODIFICAR** el numeral tercero de la sentencia objeto de apelación, en el sentido de establecer que los salarios que deberán tomarse como referencia para el pago de los aportes serán los deducidos en el cuadro 1 de la liquidación efectuada en la presente sentencia.

**CUARTO. CONFIRMAR** en todo lo demás la sentencia objeto de recurso.

**QUINTO.**: **CONDENAR** en costas procesales de segunda instancia a la parte demandada. Liquídense por el juzgado de origen.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

La Magistrada ponente,

**ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN**

La Magistrada y el Magistrado,

**OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ**

**VALORES TOMADOS EN PRIMERA INSTANCIA PARA LA LIQUIDACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** |  | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| $51700 | $ 178.600 | $ 804.640 | $ 872.320 | $ 441.800 | $ 1.390.260 | $ 582.894 | $ 405.140 | $ 1.950.500 |  | $ 764.220 | $ 1.020.000 | $ 1.420.000 | $ 186.000 | $ 197.000 |
| $51700 | $ 115.620 | $ 804.640 | $ 872.320 | $ 1.156.200 | $ 1.224.820 | $ 1.222.000 | $ 60.000 | $ 404.200 |  | $ 535.800 | $ 263.200 |  | $ 353.000 | $ 374.180 |
|  | $ 119.380 | $ 880.780 | $ 697.480 | $ 1.039.640 | $ 1.224.820 | $ 112.800 | $ 490.680 | $ 404.200 |  | $ 317.720 | $ 629.800 | $ 1.150.000 | $ 142.000 | $ 150.520 |
|  | $ 86.480 | $ 880.780 | $ 697.400 | $ 1.039.640 | $ 822.500 | $ 538.620 | $ 490.680 | $ 709.700 |  | $ 853.520 | $ 803.700 |  | $ 222.000 | $ 235.320 |
|  | $ 75.200 | $ 929.660 | $ 1.113.900 | $ 719.100 | $ 822.500 | $ 651.420 | $ 391.040 | $ 709.700 |  | $ 70.000 | $ 1.696.700 | $ 1.506.000 | $ 346.000 | $ 366.760 |
|  | $ 575.280 | $ 929.660 | $ 1.113.900 | $ 719.100 | $ 589.380 | $ 544.260 | $ 391.040 | $ 648.600 |  | $ 585.620 | $ 996.400 |  | $ 49.000 | $ 52.000 |
|  | $ 516.060 | $ 840.360 | $ 601.600 | $ 1.141.160 | $ 589.380 | $ 544.260 | $ 705.000 | $ 141.000 |  | $ 357.200 | $ 996.400 |  | $ 58.000 | $ 61.480 |
|  | $ 401.380 | $ 840.360 | $ 601.600 | $ 1.141.160 | $ 451.200 | $ 752.000 | $ 705.000 | $ 716.280 |  | $ 70.000 | $ 672.100 |  | $ 760.000 | $ 80.560 |
|  | $ 82.720 | $ 855.400 | $ 1.061.260 | $ 932.480 | $ 1.034.000 | $ 752.000 | $ 423.000 | $ 857.280 |  | $ 942.820 | $ 1.395.900 | $ 1.719.000 | $ 117.000 | 124020 |
|  | $ 1.000.160 | $ 855.400 | $ 1.061.260 | $ 932.480 | $ 596.900 | $ 733.200 | $ 423.000 | $ 857.280 |  | $ 982.300 | $ 90.000 |  | $ 313.000 | $ 331.780 |
|  | $ 737.900 | $ 695.600 | $ 354.380 | $ 891.120 | $ 596.900 | $ 909.920 | $ 451.200 | $ 857.280 |  | $ 982.300 | $ 806.520 | $ 1.300.000 | $ 185.000 | $ 120.000 |
|  | $ 737.900 | $ 695.600 | $ 606.300 | $ 891.120 | $ 451.200 | $ 909.920 | $ 451.200 | $ 709.700 |  | $ 720.040 | $ 90.000 | $ 178.000 | $ 353.000 | $ 374.180 |
|  | $ 880.780 | $ 649.540 | $ 606.300 | $ 282.000 | $ 1.034.000 | $ 733.200 | $ 677.740 | $ 709.700 |  | $ 720.040 | $ 806.520 | $ 338.000 | $ 250.000 | $ 265.000 |
|  | $ 880.780 | $ 649.540 | $ 354.380 | $ 582.800 | $ 596.900 | $ 310.200 | $ 677.740 | $ 676.800 |  | $ 521.700 | $ 169.200 | $ 136.000 | $ 62.000 | $ 65.720 |
|  | $ 963.500 | $ 592.200 | $ 955.040 | $ 582.800 | $ 596.900 | $ 310.200 | $ 532.040 | $ 676.800 |  | $ 686.200 | $ 1.598.000 | $ 213.000 | $ 82.000 | $ 86.920 |
|  | $ 963.500 | $ 592.200 | $ 955.040 | $ 282.000 | $ 451.200 | $ 253.800 | $ 532.040 | $ 846.000 |  | $ 1.207.900 | $ 1.598.000 | $ 331.000 | $ 57.000 | $ 60.420 |
|  | $ 569.640 | $ 470.000 | $ 490.680 | $ 607.240 | $ 1.034.000 | $ 394.800 | $ 376.000 | $ 846.000 |  | $ 1.090.400 | $ 16.200 | $ 47.000 | $ 235.000 | $ 250.000 |
|  | $ 569.640 | $ 470.000 | $ 490.680 | $ 607.240 | $ 959.740 | $ 761.400 | $ 582.800 | $ 535.800 |  | $ 117.500 | $ 958.800 | $ 56.000 | $ 142.000 | $ 150.520 |
|  | $ 753.880 | $ 901.460 | $ 690.900 | $ 940.000 | $ 959.740 | $ 761.400 | $ 958.800 | $ 705.000 |  | $ 1.207.900 | $ 958.800 | $ 73.000 | $ 186.000 | $ 197.160 |
|  | $ 939.060 | $ 901.460 | $ 690.900 | $ 705.000 | $ 188.940 | $ 648.600 | $ 9.780 | $ 535.800 |  | $ 902.400 | $ 864.800 | $ 112.000 | $ 284.000 | $ 301.040 |
|  | $ 939.060 | $ 564.000 | $ 272.600 | $ 705.000 | $ 188.940 | $ 47.500 | $ 202.100 | $ 705.000 |  | $ 902.400 | $ 864.800 | $ 300.000 | $ 298.000 | $ 315.880 |
|  | $ 700.300 | $ 564.000 | $ 1.152.440 | $ 940.000 | $ 1.034.000 | $ 80.000 | $ 685.260 | $ 1.898.800 |  | $ 103.400 | $ 808.400 | $ 177.000 | $ 1.515.000 | $ 1.600.000 |
|  | $ 700.300 | $ 617.580 | $ 1.152.440 | $ 80.000 | $ 1.034.000 | $ 47.500 | $ 685.260 | $ 1.898.800 |  | $ 667.400 | $ 808.400 | $ 338.000 | $ 1.177.000 | $ 1.247.620 |
|  | $ 753.880 | $ 617.580 | $ 1.036.820 | $ 80.000 | $ 856.340 | $ 1.225.760 | $ 414.540 | $ 672.100 |  | $ 507.600 | $ 869.500 | $ 240.000 | $ 25.000 | $ 26.500 |
|  | $ 714.400 | $ 753.880 | $ 376.000 | $ 878.900 | $ 1.165.600 | $ 1.225.760 | $ 616.640 | $ 672.100 |  | $ 1.278.400 | $ 131.600 | $ 59.000 | $ 74.000 | $ 78.440 |
|  | $ 714.400 | $ 753.880 | $ 1.036.820 | $ 878.900 | $ 856.340 | $ 868.560 | $ 695.600 | $ 685.260 |  | $ 789.600 | $ 869.500 | $ 78.210 | $ 74.000 | $ 104.940 |
|  | $ 683.380 | $ 1.269.000 | $ 2 | $ 924.960 | $ 650.480 | $ 948.560 | $ 990.000 | $ 685.260 |  | $ 573.400 | $ 1.126.120 | $ 55.000 | $ 99.000 | $ 125.000 |
|  | $ 683.380 | $ 1.269.000 | $ 783.960 | $ 924.960 | $ 1.165.600 | $ 225.600 | $ 695.600 | $ 652.360 |  | $ 1.363.000 | $ 131.600 | $ 225.000 | $ 117.000 | $ 26.500 |
|  | $ 846.000 | $ 982.300 | $ 783.960 | $ 859.160 | $ 650.480 | $ 789.600 | $ 916.500 | $ 652.360 |  | $ 507.600 | $ 1.126.120 | $ 136.000 | $ 25.000 | $ 98.580 |
|  | $ 846.000 | $ 982.300 | $ 376.000 | $ 859.160 | $ 662.700 | $ 1.015.200 | $ 9.780 | $ 799.000 |  | $ 512.300 | $ 1.320.000 | $ 178.000 | $ 93.000 | $ 26.500 |
|  | $ 135.360 | $ 947.520 | $ 968.200 | $ 874.200 | $ 662.700 | $ 263.200 | $ 990.000 | $ 799.000 |  | $ 1.019.900 | $ 1.320.000 | $ 272.000 | $ 25.000 | $ 31.800 |
|  | $ 1.091.340 | $ 947.520 | $ 968.200 | $ 874.200 | $ 829.080 | $ 36.000 | $ 916.500 | $ 695.600 |  | $ 515.000 | $ 1.050.000 | $ 285.000 | $ 30.000 | $ 26.500 |
|  | $ 255.680 | $ 850.700 | $ 954.100 | $ 867.620 | $ 829.080 | $ 611.000 | $ 598.780 | $ 695.600 |  | $ 1.035.000 | $ 1.050.000 | $ 1.450.000 | $ 25.000 | $ 98.580 |
|  | $ 1.226.700 | $ 850.700 | $ 954.100 | $ 867.620 | $ 761.400 | $ 263.200 | $ 598.780 | $ 419.940 |  | $ 1.550.000 | $ 1.263.000 | $ 1.126.000 | $ 93.000 | $ 130.380 |
|  | $ 845.060 | $ 985.800 | $ 950.340 | $ 40.000 | $ 761.400 | $ 732.260 | $ 564.000 | $ 216.200 |  | $ 1.010.000 | $ 1.263.000 | $ 24.000 | $ 123.000 | $ 104.940 |
|  | $ 845.060 | $ 958.800 | $ 950.340 | $ 404.200 | $ 1.043.400 | $ 36.000 | $ 564.000 | $ 528.280 |  | $ 1.010.000 | $ 1.309.000 | $ 71.000 | $ 990.000 | $ 132.500 |
|  | $ 255.680 | $ 1.736.180 | $ 971.960 | $ 40.000 | $ 1.043.400 | $ 1.343.260 | $ 642.960 | $ 419.940 |  | $ 280.000 | $ 1.309.000 | $ 71.000 | $ 125.000 | $ 77.380 |
|  | **$ 11.691.720** | $ 1.736.180 | $ 971.960 | $ 404.200 | $ 300.800 | $ 871.380 | $ 642.960 | $ 528.280 |  | $ 750.000 | $ 1.145.000 | $ 95.000 | $ 73.000 | $ 55.120 |
|  | $ 974.310 | $ 789.600 | $ 963.500 | $ 244.400 | $ 640.140 | $ 939.060 | $ 730.380 | $ 580.700 |  | $ 465.000 | $ 441.000 | $ 112.000 | $ 52.000 | $ 44.520 |
|  | | $ 789.600 | $ 963.500 | $ 216.200 | $ 940.940 | $ 939.060 | $ 343.000 | $ 1.066.900 |  | $ 1.495.000 | $ 1.165.000 | $ 24.000 | $ 42.000 | $ 55.120 |
|  | | $ 914.620 | $ 60.000 | $ 235.000 | $ 545.200 | $ 1.159.960 | $ 713.460 | $ 763.280 |  | $ 1.235.000 | $ 1.606.800 | $ 89.000 | $ 52.000 | $ 121.900 |
|  | | $ 914.620 | $ 60.000 | $ 94.000 | $ 545.200 | $ 1.159.960 | $ 713.460 | $ 763.280 |  | $ 1.235.000 | $ 1.190.000 | $ 24.000 | $ 115.000 | $ 177.020 |
|  | | $ 1.386.500 | $ 857.280 | $ 834.720 | $ 676.800 | $ 575.171 | $ 112.800 | $ 714.400 |  | $ 1.185.000 | $ 1.190.000 | $ 29.000 | $ 167.000 | $ 22.260 |
|  | | $ 1.386.500 | $ 857.280 | $ 1.624.320 | $ 676.800 | $ 958.800 | $ 629.800 | $ 714.400 |  | $ 1.185.000 | $ 940.000 | $ 24.000 | $ 21.000 | $ 27.560 |
|  | | $ 755.760 | $ 1.260.540 | $ 40.000 | $ 235.000 | $ 958.800 | $ 742.600 | $ 399.500 |  | $ 660.000 | $ 911.800 | $ 89.000 | $ 26.000 | $ 32.860 |
|  | | $ 755.760 | $ 1.260.540 | $ 40.000 | $ 616.640 | $ 262.000 | $ 690.900 | $ 756.700 |  | $ 795.000 | $ 1.851.800 | $ 118.000 | $ 31.000 | $ 32.860 |
|  | | $ 20.159.580 | $ 800.880 | $ 40.000 | $ 616.640 | $ 262.000 | $ 690.900 | $ 1.156.200 |  | $ 1.455.000 | $ 1.460.000 | $ 95.000 | $ 31.000 | $ 44.520 |
|  | | $ 1.679.965 | $ 800.880 | $ 832.840 | $ 235.000 | $ 575.171 | $ 709.700 | $ 878.900 |  | $ 867.926 | $ 1.460.000 | $ 120.000 | $ 42.000 | $ 99.640 |
|  | |  | $ 376.000 | $ 872.840 | $ 488.000 | $ 908.040 | $ 709.700 | $ 177.308 |  | $ 473.414 | $ 550.000 | $ 70.000 | $ 94.000 | $ 45.000 |
|  | |  | $ 376.000 | $ 403.260 | $ 612.880 | $ 908.040 | $ 817.800 | $ 878.900 |  | $ 1.341.340 | $ 1.540.000 | $ 50.000 | $ 40.000 | $ 410.000 |
|  | |  | $ 1.143.040 | $ 403.260 | $ 612.880 | $ 1.134.580 | $ 817.800 | $ 177.308 |  | $ 858.064 | $ 2.090.000 | $ 40.000 | $ 10.076.000 | $ 110.000 |
|  | |  | $ 1.143.040 | $ 235.000 | $ 423.000 | $ 1.134.580 | $ 1.391.200 | $ 852.580 |  | $ 360.000 | $ 329.000 | $ 50.000 | $ 839.667 | $ 60.000 |
|  | |  | $ 1.026.480 | $ 235.000 | $ 303.620 | $ 357.200 | $ 817.800 | $ 420.180 |  | $ 360.000 | $ 1.060.000 | $ 110.000 | $ 74.000 | $ 210.000 |
|  | |  | $ 1.026.480 | $ 343.100 | $ 488.000 | $ 1.117.660 | $ 1.391.200 | $ 1.272.760 |  | $ 355.061 | $ 1.060.000 | $ 160.000 | $ 913.667 | $ 290.000 |
|  | |  | $ 1.287.800 | $ 343.100 | $ 726.620 | $ 1.117.660 | $ 902.400 | $ 1.094.160 |  | $ 1.213.124 | $ 1.320.000 | $ 20.000 |  | $ 900.000 |
|  | |  | $ 1.287.800 | $ 104.940 | $ 300.000 | $ 357.000 | $ 902.400 | $ 1.094.160 |  | $ 793.955 | $ 329.000 | $ 25.000 |  | $ 20.000 |
|  | |  | $ 441.800 | $ 387.280 | $ 528.280 | $ 423.940 | $ 545.200 | $ 1.094.160 |  | $ 937.952 | $ 1.320.000 | $ 30.000 |  | $ 65.000 |
|  | |  | $ 1.156.200 | $ 387.280 | $ 700.300 | $ 643.500 | $ 545.200 | $ 728.500 |  | $ 1.731.908 | $ 1.168.000 | $ 30.000 |  | $ 45.000 |
|  | |  | $ 1.598.000 | $ 104.940 | $ 700.300 | $ 423.940 | $ 1.950.500 | $ 728.500 |  | $ 818.612 | $ 1.168.000 | $ 40.000 |  | $ 45.000 |
|  | |  | $ 24.147.461 | $ 437.100 | $ 391.040 | $ 643.500 | $ 1.950.500 | $ 764.220 |  | $ 786.065 | $ 1.219.000 | $ 90.000 |  | $ 60.000 |
|  | |  | $ 2.012.288 | $ 673.980 | $ 667.400 | $ 278.992 | $ 648.600 | $ 764.220 |  | $ 1.604.678 | $ 1.219.000 | $ 38.000 |  | $ 15.000 |
|  | |  |  | $ 673.980 | $ 1.886.720 | $ 278.992 | $ 19.758.370 | $ 20.911.948 |  | $ 177.530 | $ 29.882.240 | $ 15.236.210 |  | $ 50.000 |
|  | |  |  | $ 437.100 | $ 282.000 | $ 493.500 | $ 1.646.531 | $ 1.742.662 |  | $ 710.000 | $ 2.490.187 | $ 1.269.684 |  | $ 35.000 |
|  | |  |  | $ 413.600 | $ 391.040 | $ 493.500 |  |  |  | $ 710.000 |  |  |  | $ 10.000 |
|  | |  |  | $ 995.460 | $ 391.040 | $ 591.260 |  |  |  | $ 700.259 |  | $ 1.269.684 |  | $ 20.000 |
|  | |  |  | $ 413.600 | $ 282.000 | $ 591.260 |  |  |  | $ 800.859 |  |  |  | $ 10.000 |
|  | |  |  | $ 995.430 | $ 653.300 | $ 188.000 |  |  |  | $ 1.678.649 |  |  |  | $ 90.000 |
|  | |  |  | $ 1.257.720 | $ 488.800 | $ 464.360 |  |  |  | $ 1.232.850 |  |  |  | $ 140.000 |
|  | |  |  | $ 1.257.750 | $ 381.640 | $ 423.000 |  |  |  | $ 747.600 |  |  |  | $ 45.000 |
|  | |  |  | $ 1.390.260 | $ 1.523.740 | $ 887.360 |  |  |  | $ 1.980.450 |  |  |  | $ 11.485.000 |
|  | |  |  | $ 21.253.310 | $ 441.000 | $ 188.000 |  |  |  | $ 1.329.505 |  |  |  | $ 957.083 |
|  | |  |  | $ 1.771.109 | $ 423.000 | $ 361.900 |  |  |  | $ 877.789 |  |  |  | $ 77.700 |
|  | |  |  |  | $ 441.000 | $ 510.420 |  |  |  | $ 2.207.295 |  |  |  | $ 1.034.783 |
|  | |  |  |  | $ 972.900 | $ 510.420 |  |  |  | $ 1.020.000 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | $ 972.900 | $ 361.900 |  |  |  | $ 1.020.000 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | $ 582.894 | $ 817.800 |  |  |  | $ 32.325.623 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | $ 582.894 | $ 150.400 |  |  |  | $ 2.693.802 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | $ 1.645.000 | $ 817.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | $ 1.645.000 | $ 565.540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | $ 25.010.154 | $ 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | $ 2.084.180 | $ 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | $ 24.264.183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | $ 2.022.015 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Los valores señalados en azul, corresponden a suman que no aparecen en la liquidación del a-quo (omitidos) |
|  | Los valores señalados en verde, corresponde a valores confundidos con pagos, cuando realmente era lo causado en las facturas, para el próximo pago, es decir, se cuantificaron doble. |
|  | \*salario promedio por mes  \*Cifras dentro del año, con números inversos (error de digitación) |
|  | Pagos parciales, que sumados totalizan y corresponden a una sola cuenta de cobro que ya estaba relacionada, es decir, se cuantifican doble. |

1. La actual Sala de Decisión No. 1 la componen: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN, como Ponente, GERMÁN DARIO GÓEZ VINASCO y OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA. Esta sentencia se saca con la Sala anterior porque el asunto se registró el 16 de octubre de 2020 y fue revisada y analizada por los antiguos integrantes, asunto que sólo hasta la fecha terminó de discutirse. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentencia del 30 de agosto de 1991 (MP. Hugo Suescún Pujols). Rdo. 4361. Gaceta Judicial Nro. 2453, Tomo CCXIV Segundo Semestre, pp. 303 y ss. En este fallo la Corte Suprema decidió no casar una sentencia en un caso en que el prestador del servicio recibía ayuda de terceras personas. La Corte dijo, entonces: “el trabajador puede en ocasiones recibir colaboración de otras personas sin que esto signifique necesariamente que su labor se torne, por esta sola circunstancia, en trabajo autónomo o independiente. La complejidad del mundo moderno, y en especial de aquellas actividades que requieren una alta calificación profesional, justifica plenamente una colaboración interdisciplinaria, pues no escapa a nadie que constituiría casi un imposible físico que una operación de alta cirugía valga el ejemplo, pueda llevarse a cabo por un solo médico. Tampoco es óbice para la estructuración del vínculo laboral el que, dada precisamente la responsabilidad que tiene un cirujano, sea él, sin perder su condición de asalariado, -si es que la tiene-, quien escoja sus inmediatos colaboradores o auxiliares para una determinada operación”.  [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 5 de febrero de 1963 (MP. José Joaquín Rodríguez). Gaceta Judicial Nro. 2266, Tomo CI Primer semestre, pp. 573 y ss. En ese fallo, la Corte decidió no casar una sentencia, recurrida por una persona inconforme con que se hubiera declarado la existencia de una relación laboral, a pesar de que los servicios personales prestados por el demandante se hubieran efectuado con herramientas de propiedad de este último, y no con instrumentos del demandando (recurrente en casación). La Corte estableció: “no desvirtúa el contrato laboral el hecho de que sea de propiedad del trabajador la herramienta para ejecutar la labor, pues las partes pueden convenirlo así”. En el mismo sentido, en la sentencia del 31 de enero de 1991 (MP. Ramón Zúñiga Valverde). Gaceta Judicial Nro. 2449, Tomo CCX Primer semestre, pp. 75 y ss. En esta oportunidad, la Corte Suprema no casó una sentencia por motivos de forma en la interposición del recurso, pero censuró en ella que hubiera descartado el carácter laboral de un vínculo sólo porque el demandante había prestados sus servicios personales con herramientas propias y no del presunto empleador. Manifestó la Corte: “[s]alvo estipulación en contrario, la prestación del servicio subordinado, remunerado, con instrumentos del trabajador, no excluye el concepto de contrato de trabajo con arreglo a lo dispuesto en la regla 1ª del artículo 57 del CST, lo que significa que la circunstancia de ser el actor propietario del vehículo automotor, con el cual prestó a la demandada sus servicios personales y subordinados no lo excluía como trabajador vinculado por contrato de trabajo con la empresa”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 30 de agosto de 1991 (MP. Hugo Suescún Pujols). Rdo. 4361. Gaceta Judicial Nro. 2453, Tomo CCXIV Segundo Semestre, pp. 303 y ss. En esta sentencia también se rechazó el argumento del recurso de casación en el sentido de que la sentencia recurrida había sido ilegal por haber concluido que había contrato de trabajo pese a que el servicio personal se prestaba sin sujeción a horarios de trabajo. La Corte Suprema descartó que ese hecho desvirtuara el carácter laboral del vínculo: “[a]un cuando la fijación de horarios por el empleador es quizás uno de los hechos más característicos de la subordinación laboral, no cabe predicar, a contrario sensu, que cuando esa fijación no exista deba por fuerza, suponerse la autonomía en la prestación del servicio”.  [↑](#footnote-ref-4)
5. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 11 de febrero de 1994 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio). Gaceta Judicial Nro. 2468, Tomo CCXXIX, Vol. I, pp. 127 y ss. En esa ocasión, la Corte casó una sentencia en la cual se consideró que la parte demandada había desvirtuado el carácter laboral de una relación de prestación de servicios personales, porque lo había hecho sólo con dos medios de prueba: el relativo a la prestación efectiva de servicios a otra persona, con lo cual el demandante había incumplido el pacto de exclusividad. La Corte dijo que la relación laboral “no podría sufrir la pérdida de su naturaleza debido a condiciones estipuladas en otro contrato aun cuando sea éste también laboral”. [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 30 de agosto de 1991 (MP. Hugo Suescún Pujols). Rdo 4361. Gaceta Judicial Nro. 2453, Tomo CCXIV Segundo Semestre, pp. 303 y ss. En este fallo, la Corte despachó desfavorablemente el recurso de casación interpuesto contra una providencia en la cual se había reconocido la existencia de un contrato laboral, entre otras cosas, a pesar de que el pago de la remuneración no era mensual, no aparecía en el registro contable como pago de salarios, y de que las órdenes se libraban en lenguaje amable y cortés. La Corte dijo, al respecto: “[e]l contrato de trabajo no deja de serlo por el hecho de que las órdenes laborales se envuelvan en un lenguaje cortés o amable, pues el ideal de toda relación humana es que ella se desarrolle en un plano de recíproco respeto”, “tampoco se desnaturaliza el contrato de trabajo porque la remuneración no sea pagada mensualmente”, “tampoco se desnaturaliza el contrato de trabajo porque quien […] paga [la remuneración] impute contablemente el pago a otros rubros de su contabilidad” [↑](#footnote-ref-6)
7. En 1ra. instancia se condenó a la demandada “a pagar, dentro del término de dos meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, al fondo pensional que el señor JOSÉ GUILLERMO CARRASQUILLA SÁNCHEZ elija (…) a pagar los aportes por periodo corrido entre marzo 15 de 1993 y diciembre 22 de 2016, en su totalidad, en cuanto haya dejado de cotizar (…)” y se añadió lo siguiente: “Fuera de lo anterior, deberá reajustar los aportes al sistema de seguridad social integral en pensiones de acuerdo a los salarios aquí deducidos, siempre que sean superiores al salario mínimo legal mensual para cada anualidad o en el valor que se hayan efectuado las cotizaciones correspondientes, por parte del actor”. (numeral 3 de lo resolutivo de la sentencia). [↑](#footnote-ref-7)